

PROYECTO DE REFORMAS
AL
ÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Y DE LEYES ANEXAS

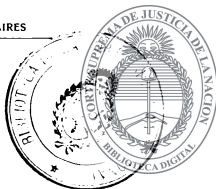
CANES

EDICIÓN OFICIAL



LA PLATA
TALLER DE IMPRESIONES OFICIALES

1931



PROYECTO DE REFORMAS
AL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Y DE LEYES ANEXAS

EDICIÓN OFICIAL

LA PLATA

TALLER DE IMPRESIONES OFICIALES

1931

1 400282



61060





COMISIÓN DE PROCEDIMIENTO PENAL

DR. ISMAEL CASAUX ALSINA (Presidente)

- » JUAN SILVA RIESTRÁ
- » EDUARDO C. RÍOS
- » FRANCISCO ORIONE



ANTECEDENTES





Decreto proponiendo las reformas y designando la Comisión encargada de ellas

La Plata, enero 8 de 1931.



Considerando:

1° Que dentro de las facultades que incumben a la Intervención Nacional, relacionadas con la reorganización institucional de la Provincia, está la de reunir elementos de juicio que permitan desenvolver eficazmente las futuras tareas legislativas;

2° Que existe un consenso unánime en el sentido de que las leyes orgánicas y de procedimientos de la Provincia no consultan las modalidades y exigencias del medio en que deben ser aplicadas. La necesaria delegación de facultades judiciales a la autoridad policial de campaña, como consecuencia de la imposibilidad en que los jueces se encuentran de actuar directamente en el período inicial de la instrucción, es un importante motivo de perturbación que podría conjurarse en parte creando la justicia de instrucción, por lo menos en la medida que lo permita — y por vía de ensayo — los recursos fiscales;

3° Que la forma como ha sido articulado el recurso de hábeas corpus en la legislación procesal — en pugna con los principios doctrinarios que en todas partes informan dicha institución — si bien ocasionalmente puede impedir la consumación de una arbitrariedad, constituye como regla general una traba al normal desempeño de la función judicial;

4° Que siendo la fecha de la actual legislación procesal anterior a la sanción del código penal, necesariamente falta la indispensable adecuación de las normas adjetivas a las sustantivas, derivando de ello trastornos que repercuten en detrimento del bienestar general.

Por ello, el Interventor Nacional delegado —

DECRETA:

Art. 1° Créase una Comisión honoraria encargada de proponer un plan general de reforma de las leyes de organización judicial y de procedimientos de la Provincia.

Art. 2° La Comisión estará compuesta de las siguientes personas: doctor Ismael Casaux Alsina, Presidente de la Suprema Corte de Justicia; doctor Eduardo C. Ríos, Vocal de la Cámara de Apelación en lo Criminal del Departamento de la Capital; doctor Ricardo Bunge (hijo), Juez de primera Instancia en lo Civil y Comercial del Departamento de la Capital; doctor Espiridión Sánchez, ex Secretario del Juzgado Federal de La Plata; doctor Juan Silva Riestra, doctor Gregorio Lecot (1) y doctor Manuel F. Escobar.

Art. 3° Designase Secretario de la Comisión al señor Tomás Jofré (h.), con la asignación que oportunamente se fije. (2)

Art. 4° Comuníquese, etc.

ZAVALLIA.

M. DE VEDIA (HIJO).

(1) Por renuncia del doctor Gregorio Lecot y decreto de fecha 10 de febrero, fué designado en substitución del mismo el doctor Francisco Orione, ex vocal de la Cámara de Apelación del Departamento del Sur.

(2) En primera reunión, con fecha 4 de febrero, la Comisión nombró relator general de la misma al doctor Andrés D'Onofrio, Secretario Sumariante de los Juzgados del Crimen del Departamento de la Capital; y relatores de Subcomisión a los doctores Andrés Moreno y Teófilo Cuello, todos ellos *ad honorem*.

Actuó de Secretario de las comisiones el señor Tomás Jofré (h.).



Nota elevando los proyectos de reformas

La Plata, mayo 2 de 1931.

Al señor Secretario de Gobierno de la Intervención Nacional, doctor Clodomiro Zavala. —

Tenemos el honor de presentar a V. E. los proyectos de reformas a los Códigos de Procedimientos sobre materia Civil, Comercial y Penal, y de las leyes relativas al establecimiento de la Justicia de Instrucción en la Provincia, a la creación de una Cámara de Apelación en cada Departamento Judicial, y al juzgamiento de los delitos contra el honor propagados por medio de la prensa, leyes éstas sin cuya sanción no podrá entrar en vigencia el Código de Procedimiento Penal que se propone.

La Comisión para llenar los altos fines de bien público que se le encomendó por decreto de fecha 8 de enero, dividió la tarea en dos subcomisiones.

Los doctores Juan Silva Riestra, Francisco Orión y Eduardo C. Ríos tuvieron a su estudio la materia penal. Los doctores Manuel F. Escobar, Ricardo Bunge (h.) y Espiridión Sánchez, la Civil y Comercial bajo la presidencia común del doctor Ismael Causaux Alsina.

Dado el tiempo premioso que se fijó verbalmente para el término de este importante trabajo, ha sido necesario consagrarse íntegramente, con el acopio de nuestra experiencia, pudiendo así cumplir nuestro honroso cometido.

En la exposición de motivos que precede a cada proyecto de Código, se mencionan en forma sintética, las principales reformas proyectadas con los fundamentos que las han originado.





Persuadida la Comisión de que en la reforma legislativa debe primar el sistema evolutivo y la expresión de la vida real, ha tomado como base de su trabajo los Códigos vigentes, y proyectado las reformas que condicen con el común sentir y que tienden a simplificar los juicios, fijando reglas de procedimiento que se ajusten a los progresos modernos y garanticen el triunfo de la verdad y la justicia.

La obra realizada ha de contribuir, seguramente, al bien buscado, pues domina en ella un espíritu eminentemente práctico y propone la derogación de todas aquellas disposiciones legales que carecen de una sanción efectiva o que dan lugar, por la imposibilidad material de cumplirlas, a que los mismos Jueces las infrinjan.

Nuestras reformas se ajustan a necesidades sentidas y tienden a garantizar los derechos de los litigantes y mantener el prestigio de la justicia.

Las normas procesales destinadas a hacer efectivos los derechos, por buenas que ellas sean, no llenarán sus altos fines si no se tiene buenos jueces.

A ello deben propender los poderes públicos, puesto que como lo sostienen los tratadistas, las deficiencias y defectos no están propiamente en las leyes, sino en la manera de interpretarlas y de aplicarlas.

Imbuídos en estas sanas ideas hemos procurado cumplir nuestro honroso cometido y remitimos a V. E. este trabajo destinado a contribuir al progreso de nuestra legislación procesal.

Dejamos constancia de la colaboración asidua e inteligente que han prestado a la Comisión el Secretario don Tomás Jofré (h.) y el relator general doctor Andrés D'Onofrio.

Con nuestros mejores votos por la ventura personal de V. E., le presentamos la expresión de nuestra distinción.

ISMAEL CASAUX ALSINA, EDUARDO C. RÍOS,
MANUEL F. ESCOBAR, JUAN SILVA RIES-
TRA, FRANCISCO ORIONE, RICARDO BUN-
GE (HIJO), ESPIRIDIÓN SÁNCHEZ.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS





Exposición de motivos

*Al señor Secretario de Gobierno de la Intervención Nacional,
doctor Clodomiro Zavala.*

La Comisión encargada de proponer reformas al Código de Procedimiento Penal de la Provincia, viene a presentar a V. E. el resultado de sus trabajos.

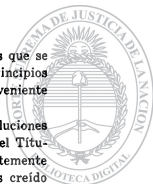
El proyecto que tenemos el honor de acompañar a la presente comprende, como el Código actual, cinco libros y mantiene la misma subdivisión en secciones, títulos y capítulos, aunque, en virtud de las dos instituciones fundamentales que incorporamos y varían esencialmente nuestro procedimiento penal, algunos de ellos han desaparecido, se han sustituido otros y armonizado el resto con las nuevas normas procesales. Nos place, sin embargo, declarar desde ahora, que hemos seguido con atención y ratificado en los casos pertinentes el pensamiento y hasta la letra del Código en vigor.

El establecimiento del juicio oral para todas las causas y la instrucción judicial de los sumarios, con sus correlatos indispensables; del juicio de calumnia o injurias propagadas por medio de la prensa; del procedimiento relativo a menores, a la condena y libertad condicionales, amén de otras instituciones que en su oportunidad señalaremos, informan los rasgos más salientes de la labor que se nos confiara.

I

En el Libro I, las disposiciones referidas a la Defensa, que en la ley actual inician su articulado y que juntamente con otras ocupan en ella lugar impropio, pasan a integrar el capítulo que denominamos «Disposiciones varias». Hemos creído así remediar un error técnico evidente, dando comienzo al proyecto con los preceptos que atañen a la jurisdicción y competencia del Juez, fuente legal de sus atribuciones y límite de su ejercicio.





Con análogo criterio reunimos en ese capítulo normas que se hallaban dispersas en el Código y que, por enunciar principios generales de legislación procesal, era de todo punto conveniente presentarlas en forma conjunta.

De igual modo, al tiempo que tratamos de facilitar soluciones en los problemas que a menudo suscitan las materias del Título I, aclarando el texto allí donde no resulta suficientemente claro, conforme a los dictados de la experiencia, hemos creído darle mayor comprensión a su leyenda agregándole «y cuestiones de competencia».

En el Título II — «Excusaciones y Recusaciones» — introducimos la sanción que establece el artículo 22. Se busca por tal medio garantizar a las partes la entera imparcialidad de los funcionarios que en él se mencionan, previniendo severamente a éstos de todo el esfuerzo honesto que la ley les exige para el más alto cumplimiento de sus funciones.

Así también, en los Títulos III y IV, la Comisión ha tenido en cuenta la necesidad de evitar demoras y posibles nulidades, disponiendo que las resoluciones de los Tribunales sean notificadas por el mismo que las dictó. Se abrevian los trámites, se dá mayor certeza a su conocimiento por los interesados y se reducen al mínimo todos los términos, tanto para los jueces como para las partes. Con tales disposiciones afirmamos, prácticamente, el concepto democrático de la justicia — económica y rápida — que ha presidido en todo instante nuestra labor.

II

El establecimiento de la justicia de instrucción, cuyos beneficios reclaman cada día con mayor apremio opinión de legos y letrados y las necesidades primordiales de un buen servicio público, caracteriza las modificaciones introducidas en el Libro II.

La crónica diaria, los comentarios frecuentes de la prensa y el análisis autorizado de las dificultades, muchas veces insalvables, a que dá lugar el ejercicio de funciones judiciales por la policía, fundamentan sobradamente, aparte de las razones de orden técnico que sería obvio señalar por su generalizado concepto, la reforma que auspiciamos del modo más decidido. Mediante ella, la delegación del poder judicial de

que inviste a los comisarios, en manifiesta contradicción con la doctrina de sus disposiciones básicas, el Código vigente, se reduce a la exigencia absolutamente indispensable de las primeras y más urgentes medidas sumariales.

Hemos creído necesario afirmar el valor metódico de la indagación del delito y de la verificación de sus circunstancias, conforme a los postulados de la ciencia penal y a los congruentes principios procesales. Más que en las sustantivas, es en las leyes adjetivas donde se advierte la tónica cultural de un pueblo y, siendo éstos el fruto maduro de una honda y dolorosa experiencia en la infatigable marcha del hombre hacia las cimas más altas de la vida social, no se comprende ni puede lógicamente admitirse que obra de tal trascendencia deba dejarse en manos que, en el supuesto más favorable, podríamos llamar empíricas. La realidad, como se sabe, es otra. Y la instrucción judicial de las causas, al decidir eficazmente sobre la competencia profesional de sus ejecutores, realza la dignidad de la justicia, enaltece el respeto ciudadano y devuelve a la policía su verdadera función, meramente preventiva. Una policía represiva, como es hasta aquí la nuestra, se halla ocasionada a toda suerte de excesos que lesionan normas elementales de derecho público.

*

De acuerdo con este criterio, en los proyectos de leyes anexas al Código que a él adjuntamos, se crean los Juzgados de Instrucción, los Fiscales, Defensores de Pobres y las Cámaras de Apelación estimados indispensables. Su distribución territorial ha sido determinada conforme a las facilidades del rápido traslado y en base a las estadísticas de sumarios, lo que asegura su acertado funcionamiento. Asimismo al establecer dos Juzgados en cada circunscripción, se logra la permanencia de uno, por lo menos, de los jueces en el respectivo asiento, hecho éste del mayor interés si se tiene en cuenta que están facultados para sobrepasar y que esta forma de poner término a las causas requiere un estudio atento de las mismas en lapsos perentorios, fuera de las exigencias propias del despacho del Juez ausente.

Por lo demás, los gastos que insumirá la institución, son, debemos declararlo, más aparentes que reales. Han sido estu-





diados cotejando los presupuestos policiales de los últimos años a través de su numeroso cuerpo de sumariantes y de su abundante partida de viáticos, casi siempre ampliada dentro del ejercicio anual; las erogaciones que demanda el prolongado racionamiento de presos; las grandes sumas invertidas por la Provincia en pasajes para éstos, testigos y peritos y las cantidades que resultan de la copiosa correspondencia postal y telegráfica que, forzosamente, en el sistema actual, deben mantener los Tribunales con sus auxiliares. Tan pronto se compulsen esas partidas se verá que sus dispendios exceden todas las previsiones. Si a ello se agrega el hecho de la supresión de los Juzgados del Crimen y de los Fiscales de Cámara, se alcanzará que no es menester acudir a nuevas fuentes de recursos para el sostenimiento de la justicia de instrucción, sino en escasa medida. Es en los gastos ya autorizados que, cambiando su imputación y con gran beneficio público, deben buscarse en gran parte los fondos necesarios.

Se ha dicho, y no faltará quien lo repita, que la justicia de instrucción, atenta la extensión territorial de la Provincia, es cara. Aparte de los inapreciables bienes que ella representa y va a tutelar en forma honrosa, no lo dudamos, esa afirmación no responde a la realidad civil de Buenos Aires y desconoce las razones supremas, lo repetimos, de un buen servicio público. Y si somos los primeros en admitir, v. gr., que una adecuada red caminera tendrá para la economía de la Provincia insospechables resultados, no tenemos inconveniente en afirmar hasta el último que una sociedad democrática sin apropiada justicia se resiente en su organización y malogra los fines primordiales que originan y sustentan la convivencia social.

*

Para asegurar el éxito de sus propósitos, la Comisión establece que los nuevos jueces reúnan las condiciones exigidas a los actuales del Crimen. Por eso dispone, en primer término, que éstos pasen a ocupar dichos cargos y les fija la misma remuneración. Queremos evitar así, en nuestro medio, la censura que, en elocuentes conceptos, hizo el celebrado profesor de la Universidad de Bruselas Adolfo Prins, a ciertas legislaciones de la materia. Decía éste que, para funciones tan importantes como las de la justicia represiva, aun más



difíciles de desempeñar cuando se trata de Tribunales inferiores, en virtud de que son los que ponen al Juez en relación constante con los desheredados, se elije a la gente más joven, se le fija un sueldo irrisorio y luego, con gran tranquilidad de ánimo el legislador deja marchar las cosas convencido de que ha asegurado el reino de la justicia. Hacemos nuestra la observación.

Deber ineludible nos parece proporcionar las garantías indispensables en materia procesal, toda vez que ello no solamente se refiere a los culpables declarados tales en juicio, sino, también, a todas las personas que, como consecuencia inevitable de las relaciones propias de la comunidad, pueden verse envueltas en procesos criminales.

Con los requisitos indicados en el proyecto y los recursos que en el mismo se acuerdan, esperamos que esta nueva magistratura alcance el bien público a que está destinada.

*

En el capítulo «Declaración del imputado», lo mismo que en el referente a «Circunstancias personales del procesado», introducimos normas que sin modificar, en el primer caso, los extremos de fondo y forma de la indagatoria, tienen fundamental importancia acerca del reconocimiento que en ellas se hace del alto valor representado por la personalidad humana, cualquiera sea la situación en que los hechos la coloquen.

Pretendemos salvar con ello el error asaz generalizado de que los detenidos, en general, dejan por ese hecho de merecer la consideración debida normalmente a los habitantes, error cuya gravedad salta a la vista cuando se tiene en cuenta que tan sólo un treinta por ciento de las causas llegan a sentencia y que éstas resultan muchas veces absolutorias. De ahí el empeño de todo legislador responsable de dotar a las leyes de procedimiento penal de las mayores seguridades de acierto.

En adelante, pues, las vejaciones de hecho y de palabra a que suele someterse a los acusados, serán absolutamente corregidas por el fecundo concepto moral que dicta las nuevas disposiciones, dejando a la conciencia de los declarantes y a la ilustración y dignidad de la magistratura, la realización siempre delicada y compleja de una buena justicia.



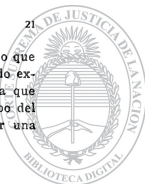
Las afirmaciones de la ciencia penal no añaden ni comprenden, para nosotros, enseñanza más pura que la contenida en el inolvidable consejo que Cervantes pone en boca de su universal personaje, en casa de los duques, poco antes de que partiera Sancho al gobierno de la Insula: «Al culpado, que cayere bajo tu jurisdicción, considéralo hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuando fuera de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstrate piadoso y clemente; por que aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia».

En cuanto atañe a las características específicas del procesado, manda el Código que entre las primeras medidas del Juez, se cumpla la del examen médico-legal del detenido, a fin de que la información antropológica llegue en su debida oportunidad y satisfaga los verdaderos propósitos de la ley de fondo, para la mejor apreciación de la íntima naturaleza del delito, de la persona de su autor, de su responsabilidad y de la necesaria individualización de la pena.

*

Han sido, también, motivo de atenta consideración las disposiciones que tratan de la intervención del particular damnificado, la que se extiende a los Tribunales superiores, designándose en la ley quienes pueden ser reconocidos en tal calidad y de la intervención de la parte civil en el juicio oral, sin reconocerse a ésta personería en cuanto a la persecución penal del procesado. Hemos seguido la opinión del doctor Rivarola en este punto. Creemos que el artículo 29 del Código Penal permite la reparación del daño causado por el delito conjuntamente con la imposición de la pena y que con ello no afectamos los términos del artículo 1101 del Código Civil, que solamente prohíbe dictar sentencia en ese fuero antes de que exista condenación en el juicio criminal.

Asimismo, en procura de la celeridad del procedimiento y de su mayor certeza, se dispone que el requisito impuesto por el artículo 159 del Código vigente, no se cumpla en los casos de fundada urgencia. Se ha tenido para ello en cuenta, al par que los términos que perfilan el concepto de la reforma, el hecho de la instrucción judicial de los procesos, en todo mo-



mento idónea. La disposición conserva, empero, el criterio que determina el referido artículo y al establecerse por modo excepcional sólo se busca que, medidas de la importancia que revisten las relacionadas con la comprobación del cuerpo del delito no se vean trabadas, siendo indispensables, por una fulminación de nulidad que las haga inoperantes.

*

Indiscutible interés ofrecen, igualmente, las modificaciones introducidas en el Título IV de este libro. Por una parte dispónese que nadie podrá ser detenido por delitos o faltas penados con multa. Hemos creído necesario, no obstante la expresa cláusula constitucional, incorporar al Código, taxativamente, el derecho que ella consagra a fin de evitar innumerables abusos.

Por la otra facúltase al Juez para que, de acuerdo con el texto y la doctrina de los artículos 40 y 41 del Código Penal fije *prima facie*, la pena que pudiera corresponder al acusado, a fin de que pueda éste gozar de libertad provisional cuando el delito aparezca reprimido con pena superior a dos años de prisión. Las legislaciones modernas y más adelantadas establecen términos mucho más amplios que los nuestros en materia correccional. Y si bien la Constitución de la Provincia no permite extenderlos, nada empece al establecimiento de la facultad acordada por el artículo 173 del proyecto. Se ha objetado, frente al Código en vigor, que ella importa un prejuzgamiento. El argumento carecerá totalmente de eficacia al sustituirse, por los de Instrucción, a los actuales jueces del Crimen.

Por lo demás, atenta la flexibilidad legal de las penas, que autoriza, v. gr., desde mínimas de un mes hasta máximas de seis años para un mismo delito, es sólo en presencia del hecho y sus circunstancias que el Juez puede, conforme a las citadas disposiciones y a la mayor o menor peligrosidad de su autor, determinar el alcance de la reacción social contra la delincuencia. Con lo que de paso soslayamos el problema carcelario — cuya impostergable solución, de luengos años reclamada, todavía espera la Provincia — pues la medida tiende, también, a descongestionar los malos establecimientos existentes, lográndose así la doble ventaja de la economía del Estado y del mayor bien público.

Otra de las modificaciones de que ha sido objeto este libro, es la que acuerda recurso de apelación del auto de prisión preventiva. Entiende la Comisión que, tratándose de un auto interlocutorio no debe, dada su importancia y gravedad, sustraerse a su revisión, por esa vía, del Tribunal superior en grado al que lo dictó.



III

Trata el Libro III de la oralidad del juicio criminal, que constituye una de las reformas esenciales del proyecto. La hemos adoptado estimando la eficacia que aseguran diez y siete años de vigencia de la institución en la Provincia, en juicios voluntarios de causas graves y después de consultar sus características y ventajas en otros países. Sostienen, pues, nuestro criterio antecedentes propios y foráneos.

Las estadísticas llevan al convencimiento de que son exactas las siguientes conclusiones, ya vulgarizadas en el ambiente judicial: 1º, en el juicio oral se concluye el proceso más rápidamente que en el escrito y tiene más publicidad que éste; 2º, se cometen menos errores; 3º, es menos frecuente el falso testimonio; 4º, la justicia es más barata; 5º, contribuye a la mayor cultura forense; 6º, familiariza al pueblo, mucho más que el escrito, con la idea de justicia; 7º, los intereses comunes están más garantidos contra la impunidad de los profesionales del delito.

El número de sentencias condenatorias pronunciadas por las Cámaras que, contra la creencia general, exceden proporcionalmente, a las dictadas por las mismas en juicio escrito, corroboran esta última conclusión.

En base a estas consideraciones, la Comisión ha establecido la obligatoriedad del juicio oral para todas las causas, incluso las correccionales.

A los impugnadores del sistema, fuera de las razones dadas, replicamos con el texto del artículo 177 de la Constitución provincial que prescribe: «La ley organizará los tribunales que deban aplicar el derecho en materia criminal, el modo y forma en que deben constituirse los jurys y el procedimiento que deba observarse».



Por otra parte, el acierto de la administración de justicia discernida en juicio oral por jueces de derecho y en única instancia, que no tienen más obligación que la de expresar en el fallo su convicción sincera sobre la verdad de los hechos, nos ha decidido a mantener la institución del Jurado, tal como existe actualmente, siguiendo las inspiraciones del malogrado jurisconsulto y eximio legislador don Tomás Jofré, quien concibió este sistema como el más apropiado a nuestro medio, para hacer justicia sana y rápida a la vez.

Desde otros puntos de vista, creemos que en el campo social y político ha de tener, también, gran trascendencia la oralidad del juicio criminal en todas las causas. Abrigamos la convicción de que al cabo de pocos años, mediante su ejercicio, una pléyade de abogados jóvenes aumentará el prestigio de que goza el foro de la Provincia. Siendo el derecho una disciplina integral, que se enriquece de continuo a favor de las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo y exige, más que otra alguna, dedicación y meditación constantes; y la defensa verbal un medio efficacísimo para acentuar las dotes de ilustración, intelectuales y espirituales, tanto de letrados como del público que diariamente colmará las audiencias, cabe esperar de ello positivos beneficios para la colectividad.

De un foro así concebido, que los hechos — confiamos — no han de desmentir, constitutivo de un plasma civil y democrático de tipo superior, surgirán necesariamente juristas y legisladores de mérito, cuyo contacto con la entraña viva de su pueblo haga posible una más alta nivelación de la cultura media y concurra, por modo lógico, a la más acertada acción de los gobiernos.

Cierran el Libro III disposiciones reglamentarias de la «Condena condicional», haciéndose con ello efectivos los pertinentes preceptos del Código Penal.

IV

El Libro IV legisla sobre los recursos que autoriza el proyecto, la «Ejecución de la sentencia» y la «Libertad condicional».

En lo que se refiere al primero de estos dos títulos, cabe señalar que se han agregado las normas necesarias para el debido cumplimiento de las penas establecidas en el Código

Penal, incorporándose, asimismo, una disposición que prohíbe ejecutar por honorarios en la jurisdicción criminal toda vez que no mediere condenación en costas.

En cuanto al segundo, la Comisión se limita a reglamentar lo mandado en el caso por la ley de fondo.

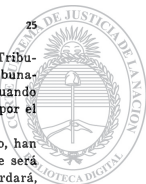
Respecto de los recursos, señalamos como reforma de la mayor importancia, la sustitución de los de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley por el de casación. Al efecto, hemos tenido presente las conveniencias que enseguida se anotan y la doctrina sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en sentencias que como la registrada, entre otras, en el Boletín Oficial del 15 de diciembre de 1914, establecen que nuestra ley fundamental no contiene más disposición sobre formas de la sentencia que la estatuida en su artículo 178, mandando que ésta se motive en el texto expreso de la ley.

Por medio del recurso proyectado, en la aplicación de los artículos 157, incisos 1° y 6° y el 178 de la Constitución Provincial, que acabamos de citar, la Suprema Corte podrá hacer las declaraciones de derecho que corresponda en todos los casos en que compruebe omisión, violación o aplicación errónea de la ley o la doctrina penal, o cuando se trate de sentencias no fundadas. Por lo demás, el proyectado recurso de casación mantiene los términos de los de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, que sustituye, para los casos en que se violen las reglas de los artículos 268, 271, 273, 278 y 279 del Código de Procedimiento, que consagran las garantías exigidas en el juicio oral.

La institución de este recurso era necesaria en nuestra ley procesal. Grandes juristas, como Dalloz, han expresado que de todos los órganos nacidos en la aurora de la revolución francesa, la casación es el único que no ha perdido nada de su prestigio. Muy por el contrario, ha ido creciendo en la estimación popular.

Entre nosotros, evitará las numerosas y sucesivas nulidades por errores materiales contenidos en las sentencias y dará lugar a una mayor difusión y aplicación de las normas jurisprudenciales de la Corte. Creemos del caso repetir aquí, con el antiguo concepto, que es preferible una mala jurisprudencia que perdura, a las oscilaciones de la dialéctica brillante de los Tribunales inferiores. Mas no se entienda por ello que proclamamos, en manera alguna, la cristalización o estanca-





miento de la jurisprudencia, o la infalibilidad de los Tribunales superiores. Sólo tratamos de significar que los Tribunales inferiores deben, únicamente, apartarse de ella, cuando ilustradas y poderosas razones jurídicas, determinadas por el medio y la cultura sociales, así lo requieran.

También los demás recursos que comprende este libro, han sufrido algunas modificaciones. En el de apelación, que será siempre concedido en relación, se establece que se acordará, fuera de los casos que corresponda por modo expreso, cuando los providencias o resoluciones judiciales causen gravamen irreparable.

El de revisión ha sido, asimismo, modificado parcialmente y en el de reposición se admite la apelación para ante la Cámara aun cuando no sea deducido en subsidio.

V

Trata el Libro V de los incidentes y procedimientos especiales y, en primer lugar, del sobreseimiento: definitivo y provisional. En éste, al tiempo que suprimimos la actual exigencia de la conformidad del procesado, modificamos los términos vigentes para que el mismo se convierta en definitivo. Entiende la Comisión que no debe subordinarse a la voluntad del acusado una resolución impuesta por las constancias de autos y que, frente a la oralidad de los juicios, aparte de que aquél puede, en cualquier momento, ofrecer nuevos datos y comprobaciones, no podría elevarse la causa a la Cámara cuando el Juez de Instrucción — y aun la misma Cámara por vía de recurso — hubiese resuelto que corresponde sobreseer provisionalmente. De otro modo, esto es, llegada la causa a plenario en esas condiciones, la absolución se impondrá en todos, o casi todos los casos, lo que no puede admitirse sin desnaturalizar la institución que nos ocupa, cuyo mantenimiento consulta los dictados de la buena práctica judicial.

Los términos que establecemos para que el sobreseimiento provisional se convierta en definitivo, son los de la prescripción de las acciones fijados por el Código Penal.

Modificamos, también, precisándola en su verdadero significado, la declaración impuesta por el artículo 383 del Código de Procedimiento en vigor, disponiendo, en el 282 del proyecto, que

la formación de la causa no influye en el concepto que gozaba el procesado.

Cierran este Título todas las reglas correspondientes a las pruebas legales y a su mérito, que el Juez debe observar, para sobreseer o denegar el sobreseimiento, fundándose en los elementos de juicio que arrojan los autos.

*

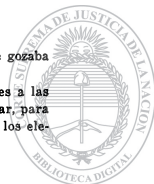
Siguen al expuesto, los Títulos relativos a «Excarcelación y eximición bajo fianza» y «Locura, fuga, rebeldía y muerte del procesado».

En el primero, se hacen extensivos, en todo cuanto sea compatible, los preceptos de la excarcelación a la eximición de prisión, por su analogía, y se autoriza aún a terceros a pedir la eximición. Al efecto consideramos que, si bien se trata de un prófugo, sometiéndose éste, por ese medio, voluntariamente, a la acción de la justicia, debe facilitarse su presentación. En cuanto a las sumas provenientes de la efectividad de las fianzas, se dispone que ellas sean transferidas al fondo escolar, de acuerdo con los artículos 8 y 15 de la ley de 4 de julio de 1878 y 62, inciso 2º de la de Educación Común.

En el segundo, teniendo en cuenta que con el régimen oral de los juicios que adopta el proyecto, la Cámara debe estar facultada para dictar resoluciones en los casos previstos por el Título, se amplían sus disposiciones en ese sentido.

*

En las reglas del *habeas corpus*, hemos contemplado el criterio expuesto por V. E. en el decreto que promueve las reformas procesales y suprimido algunos casos aconsejados por la experiencia. Empero, agregamos un inciso que comprende todos los análogos a los de restricción ilegal de la libertad, cuya procedencia y aplicación quedará librada al justo planteamiento de los interesados y al ilustrado arbitrio judicial. Además se reglamenta la competencia de los Tribunales en esta materia. Tratándose, v. gr., de restricciones a la libertad ordenadas por las Cámaras, o sus presidentes, se establece que el recurso compete a la Suprema Corte.



Motivos que son el dominio público han hecho premiosa nuestra tarea, impidiéndonos dedicar a este Título todo el interés que merece. Dejamos, sin embargo, constancia de que la Comisión entiende que el *habeas corpus* al sufrir, con el derecho público moderno, pareja evolución, ha dejado de ser el simple «recurso» de que hablan las leyes procesales y que debe, por tanto, ser objeto de legislación aparte. Bajo el título de ley de amparo, u otro semejante, parece llegado el momento de hacer viables todos los derechos y garantías enumerados e implícitos en las constituciones nacional y provincial.



*

Con la denominación común de Procedimientos Especiales comprendemos, además del referido en el parágrafo precedente, los relativos a menores, al juicio sobre faltas y al de calumnia e injurias.

Para éste se establece el juicio oral, determinándose por ley especial — adjunta al proyecto — que en los casos de propagación de la injuria o la calumnia por medio de la prensa, será de aplicación el Código Penal.

Su conocimiento se atribuye a las Cámaras, toda vez que r.o. procede en estos juicios el sumario previo, dada la naturaleza del asunto, típico de instancia privada. Y el Fiscal no es en ellos parte, salvo, naturalmente, que hubiera intereses fiscales comprometidos en la sustanciación de los mismos, en cuyo caso, recién, se le dará la intervención que corresponda.

Para evitar demoras y el señalamiento de nueva audiencia cuando no comparezca el querellado a juicio, dispone el proyecto que se cite con anticipación suficiente al Defensor de Pobres en turno, a fin de que pueda representar a aquél con debido conocimiento del asunto.

Por el artículo 343 se establece, asimismo, que la concurrencia de testigos, peritos y demás personas que se mande comparecer en estos juicios a pedido de las partes, es a costa de éstas.

En los juicios sobre faltas, desaparecidos los actuales jueces del crimen, el conocimiento de la apelación en ellos deducida, corresponde a la Cámara respectiva, ya que no es posible atribuirlo a los jueces de instrucción, creados en el proyecto, atenta la índole de sus funciones, en exceso movibles.



Pero, teniendo en cuenta la poca entidad del asunto, se ordena que intervenga en el recurso uno solo de los jueces del Tribunal, por turno, observándose el procedimiento oral, con la concurrencia del apelante y del funcionario o empleado que labró el acta de la infracción.

En materia de menores y para facilitar su aplicación, incorporamos todas las disposiciones pertinentes de la ley nacional número 10903, encomendándose a la Suprema Corte su reglamentación. Y estimando que la publicidad puede ser perjudicial, dispónese que las audiencias de estos juicios no sean públicas.

Llegamos, por último, al Título Final del proyecto, que dividimos en dos capítulos. En el primero — «Disposiciones varias» — ordénase el destino que debe darse a las armas, efectos, dinero, etcétera, secuestrados con motivo de la instrucción de la causa, beneficiándose, en los casos allí previstos, al Patronato de Liberados. Y en el segundo — «Disposiciones Transitorias» — se determina desde cuándo, cómo y con qué efectos empezará a regir el Código proyectado.

*

La Comisión presenta a V. E. este trabajo, sin el tiempo necesario para redactar otros proyectos sobre ley de vagancia, registro de reincidentes y de amparo, que dejamos aludida, los cuales tenía el propósito de confeccionar. Esa misma causa le impide ser más extensa en esta exposición de motivos, muy sucintamente anotados en relación a la importancia de las reformas proyectadas.

Abrigamos, con todo, la esperanza de haber hecho obra útil. Hemos puesto en ella nuestras mejores energías. Si lográramos, mediante su ejercicio, facilitar la tarea de la Justicia, tutelando con igual y ponderado acierto los derechos de la sociedad y el individuo afectados por el delito, habríamos compensado nuestro empeño con exceso.

Sírvase V. E. recibir las seguridades de nuestra mayor consideración.

ISMAEL CASAUX ALSINA, JUAN SILVA RIESTRA,
EDUARDO C. RIOS, FRANCISCO ORIONE.

PROYECTOS DE LEYES ANEXAS

- I. De creación de la Justicia de Instrucción en la Provincia.
- II. De creación de una Cámara de Apelación en lo Criminal en cada Departamento Judicial.
- III. De represión de los delitos contra el honor propagados por medio de la prensa.





LEY:

Art. 1° Créase la Justicia de Instrucción en reemplazo de los actuales Juzgados del Crimen y Correccional.

Art. 2° La Justicia de Instrucción estará constituida por 40 Jueces de Instrucción — 5 para La Plata, 3 para Avellaneda, 3 para Mercedes, 3 para Bahía Blanca y 2 para cada una de las demás circunscripciones a que se refiere el artículo 3° de esta ley — quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser Juez de primera Instancia; y por igual número de Agentes Fiscales, uno para cada Juzgado de Instrucción.

Art. 3° Los Jueces de Instrucción serán distribuidos en la Provincia consultando la importancia de la localidad donde tendrán respectivamente su asiento y la proximidad de los partidos a los que alcance su jurisdicción y la mayor facilidad de las comunicaciones, en la forma siguiente. Circunscripción:

1° con asiento en Bahía Blanca, comprende este Partido y los de Villarino, Patagones, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Tornquist, Saavedra y Coronel Pringles;

2° con asiento en Tandil, comprende este Partido y los de Juárez, González Chaves, Necochea, Lobería, Rauch y Ayacucho;

3° con asiento en Azul, comprende este Partido y los de Olavarría, General Lamadrid, Coronel Suárez, Laprida y Las Flores;

4° con asiento en Dolores, comprende este Partido y los de General Guido, Maipú, Chascomús, Castelli, General Conesa, General Lavalle, Balcarce, General Alvarado, Pila, Coronel Vidal, General Pueyrredón y General Madariaga;

5° con asiento en Adolfo Alsina, comprende este Partido y los de Puan, Guaminí, Caseros y Bolívar;





6° con asiento en Lobos, comprende este Partido y los de Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Roque Pérez, Navarro, Veinticinco de Mayo, Las Heras y Marcos Paz;

7° con asiento en Lomas de Zamora, comprende este Partido y los de Almirante Brown, San Vicente, Esteban Echeverría, Cañuelas, General Belgrano, Monte y General Paz;

8° con asiento en La Plata, comprende este Partido y los de Magdalena, Coronel Brandsen, Quilmes y Florencio Varela;

9° con asiento en Nueve de Julio, comprende este Partido y los de Pehuajó, Carlos Casares, Trenque Lauquen, Carlos Pellegrini, Alberti y Bragado;

10° con asiento en Lincoln, comprende este Partido y los de General Villegas, General Pinto, Carlos Tejedor, Rivadavia y General Viamonte;

11° con asiento en Mercedes, comprende este Partido y los de Chivilcoy, Suipacha, Luján, Salto, General Rodríguez, Morón, Merlo, Moreno y Matanza;

12° con asiento en Junín, comprende este Partido y los de Rojas, General Arenales, Leandro N. Alem y Chacabuco;

13° con asiento en San Nicolás, comprende este Partido y los de Pergamino, Colón, Ramallo, San Pedro y Bartolomé Mitre;

14° con asiento en Zárate, comprende este Partido y los de Barradero y Campana;

15° con asiento en Exaltación de la Cruz, comprende este Partido y los de Carmen de Areco, San Andrés de Giles, General Sarmiento, San Antonio de Areco y Pilar;

16° con asiento en San Martín, comprende este Partido y los de Vicente López, San Isidro, Las Conchas y San Fernando;

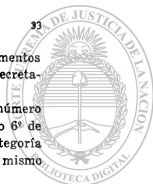
17° con asiento en Avellaneda, comprendiendo el mismo partido;

Art. 4° Los actuales Jueces en lo Criminal y Correccional serán designados en primer término para ocupar los Juzgados de Instrucción.

Art. 5° Los Jueces de Instrucción gozarán de un sueldo mensual de 1600 pesos moneda nacional.

Art. 6° Los Jueces de Instrucción actuarán con dos Secretarios que se turnarán en la forma que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia.

Art. 7° Los actuales Secretarios de los Juzgados del Crimen y Correccional serán designados para igual cargo en los Juzga-



dos de Instrucción creados por esta ley, en los Departamentos que desempeñen sus funciones; como así también los Secretarios sumariantes con título de Escribano.

Art. 8° Créanse 52 Secretarías para completar el número necesario de éstas conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de esta Ley, con igual número de empleados y de igual categoría que los existentes en las actuales, quienes gozarán del mismo sueldo, respectivamente.

Art. 9° Los Secretarios de los Juzgados de Instrucción gozarán el sueldo mensual de 800 pesos moneda nacional.

Art. 10. Los actuales Secretarios Sumariantes con título de abogado serán designados para ocupar los Juzgados de Instrucción creados por esta Ley, en el Departamento Judicial en que desempeñen sus funciones.

Art. 11. Créase un Defensor de Pobres en cada circunscripción que no sea cabeza de Departamento Judicial, con el sueldo mensual de 1.100 pesos, los que intervendrán únicamente durante el sumario.

Los actuales Defensores de Pobres reemplazarán a aquéllos por orden de turno, donde hubiera más de uno, cuando la causa sea elevada a la Cámara que corresponda para juicio oral.

Art. 12. Los Jueces de Instrucción en caso de recusación, excusación, impedimento, enfermedad, etc., se reemplazarán por orden de turno en el mismo Departamento Judicial o circunscripción. Si esto no fuera posible por hallarse impedidos todos los Jueces de un mismo Departamento Judicial o circunscripción, la Suprema Corte de Justicia proveerá al reemplazo del impedido con Jueces de otro Departamento o circunscripción.

Art. 13. Fijase la suma anual de pesos 240.000 moneda nacional para gastos de viático y movilidad de Jueces, Fiscales, Secretarios, empleados, testigos, detenidos, etc., debiendo el Habilitado del Poder Judicial depositar mensualmente en el Banco de la Provincia de la Capital y en las sucursales del mismo, donde tengan su asiento los Juzgados de Instrucción, la suma proporcional que corresponda, a la orden de cada uno de los Jueces de Instrucción de la Provincia, quienes rendirán cuenta mensualmente de su inversión.

Art. 14. Fijase la suma mensual de pesos 150 moneda nacional para el alquiler de locales en las ciudades donde no exista edificio para los Tribunales y la de 100 pesos moneda nacional para gastos de Secretaría de cada Juzgado de Instrucción.

Art. 15. Acuérdate por una sola vez la suma de pesos 50,000 moneda nacional para mobiliario y gastos de instalación de los nuevos Juzgados de Instrucción.

Art. 16. La Suprema Corte de Justicia dispondrá todo lo necesario para la instalación y funcionamiento de los Juzgados de Instrucción y reglamentará lo relativo a turnos, distribución de causas en trámite, etc.

Art. 17. Hasta tanto se incorporen al Presupuesto los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, se pagarán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 18. Comuníquese, etc.



El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de —

LEY:

Art. 1° Créase en cada uno de los Departamentos Judiciales de la Provincia una Cámara de Apelación en lo Criminal, con igual número de Jueces, Secretarios, empleados y ordenanzas que las actuales.

Art. 2° Las nuevas Cámaras en lo Criminal y las existentes en los Departamentos de la Capital y del Centro, conocerán en los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, e intervendrán, además, en juicio oral y única instancia, en las causas que les sean remitidas a ese efecto por los Jueces de Instrucción y en aquellas que deban iniciarse ante esos mismos Tribunales de acuerdo con las disposiciones de la respectiva ley.

Art. 3° En las causas por infracción a las leyes números 3645 y 3918 sobre represión del juego y a la número 2001 que prohíbe las riñas de gallos, una vez instruido el sumario por el Juez de Instrucción, lo elevará a la Cámara de Apelación que corresponda para que el juicio continúe por el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal para los demás casos, si bien en la substanciación y decisión intervendrá uno solo de los Jueces del Tribunal designado en el modo dispuesto en el artículo 351 del Código citado.

Art. 4° Las Cámaras de Apelación conocerán también de los recursos que, la ley de Justicia de Paz, la de ejercicio ilegal de la medicina y otras autorizan para ante los Jueces en lo Criminal y Correccional.

Art. 5° La jurisdicción territorial que actualmente ejercen las Cámaras de Apelación en lo criminal, queda modificada así:

a) Las del Departamento de la Capital entenderán en las causas que se tramiten ante los Jueces de Instrucción con asiento





en La Plata, Avellaneda, Exaltación de la Cruz, Lomas de Zamora, Lobos y San Martín;

b) La del Departamento del Centro en las que se tramiten ante los Jueces de Instrucción con asiento en Mercedes, Nueve de Julio y Lincoln;

c) La del Departamento de Costa Sud en las que se tramiten ante los Jueces de Instrucción con asiento en Bahía Blanca y Adolfo Alsina;

d) La del Departamento del Sud Oeste en las que se tramiten ante los Jueces de Instrucción con asiento en Azul y Tandil;

e) La del Departamento del Sud en las que tramiten ante los Jueces de Instrucción con asiento en Dolores;

f) La del Departamento del Norte en las que tramiten ante los Jueces de Instrucción con asiento en San Nicolás, Zárate y Junín;

Art. 6º Suprímese el cargo de Fiscal de Cámaras. Los actuales Fiscales de Cámara serán designados para integrar las Cámaras de Apelación creadas por esta ley en los departamentos donde desempeñen sus funciones.

Art. 7º Los Fiscales además de la intervención que les corresponde de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal en los sumarios ante los Jueces de Instrucción, intervendrán en los juicios que se ventilen en las Cámaras de Apelación, en la oportunidad y en el modo que se determina en dicho Código y en el de Procedimiento Civil en su caso.

Art. 8º Los nuevos Jueces de Cámara, Secretarios, empleados y ordenanzas gozarán el sueldo mensual que fija para los actuales la Ley de Presupuesto vigente y las nuevas Cámaras tendrán igual partida mensual para gastos que las existentes.

Art. 9º Las actuales Cámaras en lo Criminal y Correccional de los Departamentos de la Capital y del Centro, se denominarán en adelante «Cámara primera en lo Criminal» y las creadas por esta ley en los mismos departamentos «Cámara segunda en lo Criminal».

En los demás departamentos, la Cámara existente interviendrá en adelante únicamente en asuntos del fuero civil y comercial y se denominará «Cámara en lo Civil y Comercial» y la que se crea se denominará «Cámara en lo Criminal» y conocerá exclusivamente en los asuntos de este fuero.

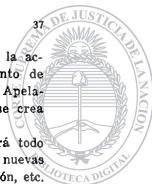
Art. 10. La más reciente de las dos Secretarías de la actual Cámara tercera de Apelaciones del Departamento de la Capital, será la Secretaría de la nueva Cámara de Apelaciones en lo criminal del mismo departamento que se crea por esta ley.

Art. 11. La Suprema Corte de Justicia reglamentará todo lo relativo a la instalación y funcionamiento de las nuevas cámaras, turnos, distribución de las causas en tramitación, etc.

Art. 12. El Poder Ejecutivo proveerá a las nuevas Cámaras del mobiliario necesario.

Art. 13. Hasta tanto se incorporen al Presupuesto, los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se pagarán de rentas generales con imputación a la presente.

Art. 14. Comuníquese, etc.



III

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de —

LEY:

Art. 1º En los delitos contra el honor, cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, las personas responsables quedarán sometidas a la sanción del Código Penal y el Tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

Art. 2º Los juicios por injurias o calumnia se ventilarán en juicio oral y única instancia, aplicándose las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

Art. 3º Comuníquese, etc.



**PROYECTO
DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL**





Proyecto de Código de Procedimiento Penal



LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

Jurisdicción, competencia y cuestiones de competencia

Art. 1. La Jurisdicción criminal es improrrogable.

Art. 2. Para determinar la competencia se tendrá en cuenta el lugar en que se ha cometido el delito, con las salvedades que se expresan a continuación:

1° Si el lugar en que se ha cometido el delito fuere desconocido, el Juez del lugar en que se hubiere procedido al arresto será preferido al de la residencia del culpable, a menos que este último hubiese prevenido en la causa. Si la detención se produce fuera de la Provincia será preferido el Juez de la última residencia.

2° Si una misma persona hubiere cometido dos o más delitos o se tratara de delitos conexos por pluralidad de agentes, para determinar la competencia se observarán las reglas siguientes:

a) Conocerá de todos ellos el Juez que hubiere prevenido cualquiera que sea la gravedad del delito en que haya tenido lugar la prevención;

b) Si dos o más Jueces hubieren prevenido el mismo día, será competente para conocer de todos ellos el que lo fuese para el delito más grave o, si fuesen de igual entidad, el que tuviera a su disposición al acusado, o el que hubiere iniciado actos de procedimiento si se tratara de varios detenidos a disposición respectivamente de los diferentes Jueces;

c) Si ninguno hubiere prevenido será competente el Juez a quien corresponda el delito más grave. En caso de delitos de igual gravedad, la competencia se determinará por la prioridad en la detención del o de los acusados.



Art. 3. El Juez o la Cámara que estuviere conociendo de una causa será competente para entender en las que se promuevan por delitos cometidos por el procesado con posterioridad o delitos anteriores que recién se descubrieren.

Art. 4. Las cuestiones de competencia pueden ser promovidas por las partes. Cuando se trate de jurisdicciones de distinta naturaleza o se promuevan con Jueces de fuera de la Provincia, se substanciarán en la forma siguiente:

1° Pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria y no se suspende el sumario cuando existan detenidos sufriendo prisión preventiva.

2° La inhibitoria se intentará ante el Juez que se considere competente, pidiendo le dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita la causa.

3° El que hubiere optado por uno de los medios señalados en el inciso 1° para promover la competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlo simultánea o sucesivamente, debiendo pasar por el resultado de aquel a que hubiese dado preferencia.

El simple aviso al Juez que se tiene por incompetente de haberse interpuesto la inhibitoria, no importa el ejercicio simultáneo de ambas excepciones.

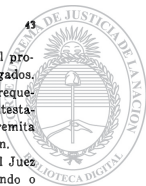
4° En el escrito de inhibitoria se expresará que no se ha empleado la declinatoria. Si resultare lo contrario, el recurrente será condenado en las costas, aunque se decida en su favor la competencia, o aunque él la abandone en lo sucesivo.

5° El Juez a quien se proponga la inhibitoria, la resolverá sin más trámite dentro de tercero día. Su auto se notificará a las partes y éstas podrán interponer dentro del mismo término los recursos de reposición y apelación en subsidio.

6° Consentido el auto de inhibitoria se librára oficio, en caso de que se hubiera hecho lugar, con transcripción del mismo y de lo demás que el Juez estime conducente para fundar su competencia.

7° El Juez requerido, cuando sea de la Provincia, procederá como se indica en el inciso 5°.

8° Consentida o ejecutoriada la sentencia en que los Jueces se hubiesen inhibido del conocimiento de la causa, se remitirán los autos al Juez que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes para que puedan comparecer ante él



para usar de su derecho, y se pondrán a su disposición el proceso, las pruebas materiales del delito y los bienes embargados.

9° Si se negare la inhibición, se comunicará al Juez requeriente lo resuelto, en la forma del inciso 6°, exigiendo contestación sobre el reconocimiento de la jurisdicción, o que se remita la causa a quien corresponda para que se decida la cuestión.

10. Recibido el oficio expresado en el inciso anterior, el Juez que haya propuesto la inhibitoria dictará auto desistiendo o sosteniendo su competencia, sin más trámite, en el término de tercero día.

11. Consentido o ejecutoriado el auto en que el Juez desista de la inhibitoria, lo comunicará al Juez competente, remitiéndole todo lo actuado para que pueda mandarlo unir a los autos.

12. Si el Juez insistiera en la inhibitoria, lo comunicará al que hubiere sido requerido de inhibición, para que remita los autos al Superior que corresponda, haciéndolo él de lo actuado ante su Juzgado, todo lo que se hará brevemente.

13. Los Tribunales que hayan resuelto la competencia remitirán dentro de tercero día la causa y las actuaciones que hubiesen tenido a la vista para decidirla, al Juez declarado competente.

14. Si la cuestión de competencia empeñada entre dos o más Jueces fuere negativa, por rehusar todos entender en una causa, la decidirá la Suprema Corte Provincial, si se tratara de Jueces de la Provincia; y la Corte Nacional, si uno de los Jueces no fuera de la Provincia.

La misma regla se observará en las cuestiones de competencia positiva.

15. Las declinatorias se substanciarán por cuerda separada, en la forma determinada por el artículo 5° inciso 1°.

16. Las inhibitorias y las declinatorias propuestas en las causas criminales no suspenderán el curso de ésta, que se continuará:

- a) Por el que haya empezado el conocimiento de la causa.
- b) Si los dos hubiesen empezado en la misma fecha, por el Juez requerido de inhibición.

17. Todas las actuaciones que se hubieren practicado durante el sumario hasta la decisión de la competencia, serán válidas, sin necesidad de que se ratifiquen ante el Juez que sea declarado competente.

Sin embargo el Juez a quien correspondiere la instrucción podrá de oficio o a pedido de parte o del particular damnificado, si interviniere, ordenar la ratificación de las declaraciones o diligencias que estimase convenientes.

Art. 5. Si se tratara de cuestiones de la misma naturaleza y entre Jueces de la Provincia, pero de distinto Departamento Judicial, se observarán las siguientes reglas:

1° Si la cuestión la promueve el Juez por considerarse incompetente, lo declarará así por medio de un auto en que se narrará el caso y se notificará al Fiscal, al acusado o a su Defensor y al querellante en los casos en que intervenga.

Dentro de los tres días de la notificación, las partes pueden pedir reposición y apelar en subsidio para ante la Cámara del Departamento, quien resolverá sin sustanciación alguna.

De todo se formará incidente agregándose un certificado sobre la fecha y lugar en que se cometió el delito, Juez que previno en el mismo y demás antecedentes que sirvan para ilustrar el caso.

No se suspenderá la prosecución de la causa principal, ni se remitirá al Juez que se crea competente ni al Superior, si éste no lo pide expresamente.

2° Si la cuestión la promueve el Juez que se considere competente, con el fin de reclamar la causa o el procesado de otro Juez, se observará en lo pertinente el procedimiento establecido en el inciso anterior.

3° Consentido el auto sobre competencia o confirmado por el superior, el Juez dirigirá oficio a quien corresponda. El Juez a quien se pretenda atribuir el conocimiento de la causa, procederá de acuerdo con lo establecido para el Juez requeriente.

4° El auto del Juez requerido se comunicará al Juez requeriente cuando fuere conforme a la resolución de éste.

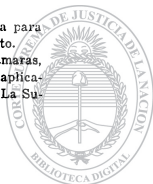
En caso contrario, elevará todas las actuaciones relativas a la competencia a la Suprema Corte, para que resuelva la cuestión y lo hará saber al otro Juez para que proceda en la misma forma.

Art. 6. Si la cuestión de competencia se promueve por Jueces de instrucción de un mismo Departamento Judicial, el que se crea competente o incompetente se dirigirá por oficio a la Cámara Criminal para que resuelva la incidencia sin más trámite y, al mismo tiempo, lo hará saber al otro Juez. Este puede



dirigirse al Superior exponiendo las razones que tenga para creer que le corresponde o no el conocimiento del asunto.

Art. 7º En las cuestiones de competencia entre las Cámaras, en las causas en que intervienen en única instancia, se aplicarán las reglas precedentes en cuanto sean pertinentes. La Suprema Corte decidirá las contiendas.



TITULO II

Recusaciones y excusaciones

Art. 8. Los Jueces, cualquiera que sea su grado o jerarquía, sólo podrán ser recusados por las causas enumeradas en esta ley.

Art. 9. Son causas de recusación:

1º El parentesco de consanguinidad, dentro del cuarto grado civil, o el segundo de afinidad, con alguna de las partes.

2º El parentesco dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad con el letrado o representante de alguna de las partes que intervengan en la causa.

3º Estar o haber sido denunciado o querellado por alguna de ellas, como autor, coautor o cómplice de un delito.

4º Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dictamen en el proceso como letrado, Fiscal o perito, declarado como testigo o dictado sentencia o resolución en el proceso sobre los puntos a decidir, salvo en los casos de los artículos 173 y 180.

5º Ser o haber sido denunciante o querellante del que lo recusa.

6º Ser o haber sido tutor o curador de alguna de las partes.

7º Haber estado en tutela o curatela de alguno de los expresados en el inciso anterior.

8º Tener el Juez, su cónyuge o sus parientes o afines en línea recta, pleito pendiente con el recusante.

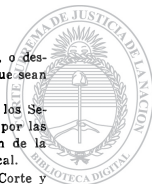
9º Tener interés directo o indirecto en la causa.

10. Tener comunidad o sociedad con alguna de las partes, excepto si la sociedad fuese anónima.

11. Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes.

12. La amistad íntima, que se manifieste por frecuencia de trato.

13. La enemistad manifiesta, odio o resentimiento que se demuestren por hechos graves y conocidos.



14. Haber recibido el Juez beneficio de importancia, o después de iniciado el proceso, presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.

Art. 10. Los representantes del Ministerio Fiscal y los Secretarios de primera Instancia, podrán ser recusados por las causas determinadas en el artículo 9°; con excepción de la designada en el inciso 5° en lo que se refiere al Fiscal.

Art. 11. Los Secretarios y Ujieres de la Suprema Corte y Cámaras de Apelación no son recusables, pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren, para que, tomada en consideración por la Corte o Cámara que conozca del pleito, provea lo que corresponda.

Art. 12. Los Jueces de la Suprema Corte de Justicia y de Instrucción pueden ser recusados por el procesado, el querellante y el particular damnificado, en su caso, al presentar su primer escrito. Los Jueces de las Cámaras de Apelación deben ser recusados en la oportunidad determinada en el artículo 231; y tratándose de juicio oral, hasta tres días antes de la audiencia del artículo 206.

En las causas por injurias o calumnia, la recusación debe deducirse por el querellante en el escrito de querrela y por el querellado en el escrito en que debe ofrecer la prueba.

Siendo la causa sobreviniente o jurando el recusante haber llegado recién a su conocimiento, puede hacer uso de este derecho en cualquier tiempo, antes de terminarse el sumario o de pronunciarse sentencia.

Art. 13. El procesado puede, además, recusar al Juez en el acto de concurrir a prestar declaración indagatoria, expresando la causa o causas en que se funde, lo que se hará constar, debiendo suspenderse el interrogatorio. Pasado el acto sin ejercitar ese derecho el procesado, en adelante no podrá éste o su defensor, si hubiere concurrido, recusar al Juez, salvo que la causa fuere sobreviniente o la dedujera con el juramento de haber recién llegado a su conocimiento.

Art. 14. Al deducir la recusación deberá expresarse la causa en que se funde, indicándose los nombres de los testigos y su residencia y acompañándose o mencionándose los documentos de que el recurrente intente valerse.

Art. 15. Los testigos no podrán ser más de cuatro por cada causa de recusación, ni el recusante podrá valerse de otros que los indicados al deducirse la recusación.



Art. 16. Si en el escrito de recusación no se alegare determinadamente alguna de las causas comprendidas en el artículo 9º, o se presentare fuera de la oportunidad designada en las disposiciones precedentes, será desechada por el Juez o Tribunal sin darle curso.

Art. 17. De la recusación de los representantes del Ministerio Fiscal, entenderá el Tribunal o Juez que estuviere conociendo de la causa.

Art. 18. Deducida la recusación de un Secretario de primera Instancia, el Juez averiguará sumariamente el hecho y sin más trámites resolverá el artículo.

Art. 19. Los Jueces de la Suprema Corte y Cámaras de Apelación que se encuentren en alguno de los casos del artículo 9º, se excusarán dentro de veinticuatro horas de pasados los autos al acuerdo. En las causas remitidas a las Cámaras para el juicio oral y en las de injurias y calumnia, la excusación deberá tener lugar hasta tres días antes de la audiencia que prescribe el artículo 206. El Presidente de la Corte y Cámaras se excusará inmediatamente que la causa sea puesta a su despacho. Siendo el motivo sobreveniente, el vocal o quien comprenda, debe manifestarlo en primera oportunidad.

Art. 20. Los Jueces de Instrucción, en los mismos casos del artículo anterior, se inhibirán de oficio del conocimiento de la causa, debiendo remitir sin más trámite el proceso al que debe reemplazarlos. Si éste entendiere que aquella es impropia, seguirá conociendo no obstante en la causa, y formará incidente por separado que remitirá a la Cámara, para que resuelva lo que corresponda.

Art. 21. Los representantes del Ministerio Fiscal y los Secretarios de primera Instancia, manifestarán ante el Tribunal o Juez que conozca del proceso, los motivos de excusación que tuviesen, debiendo dárseles por separados y proveer a su reemplazo en la forma determinada por la ley.

Art. 22. Los Secretarios de la Suprema Corte, de las Cámaras y de los Juzgados de Instrucción y los Ujieres de la Suprema Corte y Cámaras que no se excusaren, existiendo motivos para ello, serán suspendidos en sus cargos por treinta días y en caso de reincidencia, separados de los mismos.

Art. 23. Si el Juez recusado no reconoce la verdad de la causa que se invoca, se sustanciará independientemente del proceso o causa principal sin suspender ésta, formándose incidente y

sin que quede separado el funcionario del conocimiento de la causa. Si se hiciere lugar a la recusación, las actuaciones practicadas por el Juez separado serán nulas, si así lo pidiere el recusante.

Del incidente de recusación, cuando no se reconozca la causal invocada, entenderá la Cámara en juicio oral y sumario.

En los casos de recusación de un Juez de la Cámara conocerán de ella los demás Camaristas. Si quedase uno solo, procederá a integrar el Tribunal. Si ninguno quedase hábil, la causa pasará a la Cámara que corresponda para que conozca de las recusaciones.

Art. 24. Aceptada la excusación o recusación, los autos quedan radicados en el Juzgado que corresponda, aunque con posterioridad desaparezcan las causas que motivaron la excusación o recusación.

TITULO III

Notificaciones, citaciones y emplazamientos

Art. 25. Los autos y providencias judiciales serán mandados notificar, por el Juez o Tribunal que los dictó, dentro del término que establece el artículo 38, o antes si el Juez o Tribunal lo ordenare o estuviere así dispuesto para casos determinados.

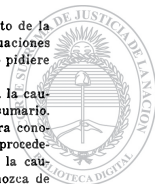
Art. 26. Las notificaciones se harán a los defensores o representantes de las partes. Sin embargo, debe notificarse también a los procesados la sentencia, el auto de sobreseimiento y el que lo deniega, el de prisión preventiva y las resoluciones que expresamente se determinan en este Código.

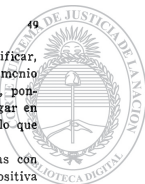
Art. 27. Las notificaciones serán diligenciadas por los Secretarios o Ujieres; y no siendo esto posible, por el empleado mayor de diez y ocho años que el Juez o Tribunal designe.

Art. 28. Para el caso de que las notificaciones se hicieran en la Oficina se extenderán en el expediente, pudiendo la persona a quien se haga sacar copia de la resolución.

Art. 29. La notificación será firmada por el que la practicare y por el interesado. Si éste no supiere o no pudiere firmar pondrá la impresión digital. Si se negare, lo harán dos testigos requeridos al efecto, no pudiendo servirse de los empleados del Juzgado o Tribunal.

Art. 30. Si la notificación se hiciere en el domicilio de las partes, el Secretario o empleado llevará una copia o cédula donde





se encuentre transcripta la providencia o resolución a notificar, que leerá al interesado haciéndole entrega de un testimonio y al pie de la primera, que se agregará al expediente, pondrá constancia de todo, con expresión del día, hora y lugar en que se practicó la diligencia, observando a su respecto lo que se prescribe en el artículo precedente.

Si se trata de sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza de tales, se transcribirá solamente la parte dispositiva de las mismas.

Si un auto comprende varios puntos, se extractará en la cédula la parte pertinente.

Art. 31. Si el Secretario, Ujier o empleado no encontrare a la persona a quien va a notificar, cualquiera que fuere el tiempo o la causa de la ausencia, entregará la cédula a alguna de las personas que residan en la casa, empezando por los parientes del interesado y prefiriendo entre éstos, siempre que fuere posible, el más caracterizado; y a falta de aquellos, a sus empleados o sirvientes, si uno y otros tuviesen más de diez y ocho años. Si no se hallare persona alguna dentro de la casa o habitación designada, hará la entrega a un vecino que sepa leer, prefiriendo al más inmediato, y procediendo en todos estos casos en la forma designada en el artículo anterior.

Si el vecino o vecinos requeridos o las demás personas a quienes se refiere este artículo, se negaren a recibir la cédula o a dar su nombre y firmar, será ella fijada en la puerta del domicilio constituido, en presencia de dos testigos que firmarán la diligencia. En este último caso, el notificador podrá requerir la cooperación de la policía para llenar su cometido si mediare resistencia.

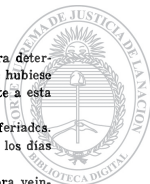
TITULO IV

Términos judiciales

Art. 32. Las resoluciones y diligencias judiciales se dictarán y practicarán dentro de los términos señalados para cada una de ellas. Cuando no se fije el término, se practicarán dentro de tres días.

Art. 33. Serán improrrogables los términos judiciales cuando la ley expresamente no disponga lo contrario.

Art. 34. Los términos de días no comprenden aquel desde el cual empiezan a correr, o sea en el que se dicta decisión o se



efectúa o realiza el acto o acontecimiento que sirve para determinar su comienzo, aun en el caso que la notificación se hubiese hecho en el mismo día, y correrán desde el día siguiente a esta diligencia.

En el término de meses se comprenderán los días feriados.

Art. 35. Durante el sumario y en el juicio oral todos los días y horas son hábiles.

Art. 36. Los términos se reputarán vencidos a la hora veinticuatro del día respectivo; pero la parte podrá presentar escritos el siguiente día hábil hasta dos horas después de abierto el Juzgado o Tribunal.

Art. 37. Vencido un término se tendrá por decaído el derecho por su solo transcurso, sin necesidad de acusación de rebeldía y el Juez proveerá lo que corresponda al estado de la causa.

Art. 38. Se fijan los siguientes términos judiciales:

1° Cuarenta y ocho horas para las notificaciones que se hagan dentro de la ciudad donde tenga su asiento el Juzgado o la Cámara.

2° Tres días para las simples providencias de trámite.

3° Cinco días para los autos interlocutorios.

Art. 39. Las causas quedarán terminadas a más tardar:

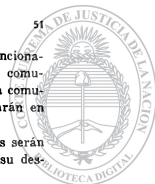
1° A los treinta días el sumario, pudiendo prorrogarse por solamente veinte días, cuando las medidas a realizarse lo exigieren, comunicándolo a la Suprema Corte.

2° A los dos meses en la Cámara.

Art. 40. En los términos del artículo anterior no se computará el tiempo que se emplee en diligencias que deban practicarse fuera de la Provincia.

Art. 41. Vencidos los términos señalados en los artículos 38 y 39, si el Juez o la Cámara no hubieran terminado el sumario o la causa, respectivamente, lo comunicarán a la Suprema Corte y al Procurador General, con un informe para que se resuelva lo que corresponda. Este informe se reiterará cada diez días mientras no desaparezca el motivo que lo determina. La omisión en el cumplimiento de estos requisitos importará falta grave.

Art. 42. Si uno de los vocales de la Cámara no devuelve despachado el expediente dentro del término que en cada caso fijará el Presidente, éste lo conminará para que lo haga en plazo prudencial, que se hará constar en los autos. Esta disposición es aplicable a los magistrados que integren el Tribunal.



Si a pesar de ese emplazamiento no se éxpdiere el funcionario que tuviere en su poder los autos, el Presidente lo comunicará de oficio a la Suprema Corte, debiendo reiterar la comunicación cada diez días. Estas resoluciones se consignarán en un libro que estará a disposición del público.

Art. 43. El Ministerio Fiscal y el Defensor de Pobres serán notificados por cédula cuando no se les encontrare en su despacho.

Art. 44. Si un Secretario o Ujier demora la notificación, el libramiento de oficios, la remisión de expedientes al Juez o Tribunal a quien corresponda, o comete otras faltas análogas, será apercibido la primera vez por su superior inmediato y suspendido hasta por quince días en caso de reincidencia.

TITULO V

Costas

Art. 45. El vencido, sea en la causa o en los incidentes, será condenado al pago de las costas. Pero si reclamase, el Juez o en caso de recurso la Cámara, podrá exonerarlo de las mismas, excepto cuando han sido impuestas en la sentencia en el juicio oral.

TITULO VI

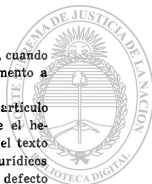
Disposiciones varias

Art. 46. En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al procesado.

Art. 47. A la acusación incumbe la prueba de la culpabilidad del procesado.

Art. 48. Todo acusado será defendido por el Defensor de Pobres, quien intervendrá en el proceso hasta que sea sustituido por el abogado de la matrícula que propusiese aquél. Esta sustitución no se considerará operada mientras el defensor particular no haya aceptado el cargo y constituido domicilio, a cuyo fin se le hará saber la designación si estuviere domiciliado en la circunscripción o Departamento Judicial.

Si el expediente pasare de un Departamento de campaña a la Suprema Corte, el acusado será defendido por el Defensor de Pobres de la Capital, mientras el defensor particular no fije domicilio en La Plata.



Lo mismo se hará con el Defensor de Pobres respectivo, cuando el expediente pasare de una circunscripción o Departamento a otro.

Art. 49. Los autos interlocutorios que decidan algún artículo o causen gravamen irreparable, designarán claramente el hecho o cuestión sobre que recaigan y serán fundados en el texto expreso de la ley y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

Art. 50. Las providencias o decretos de mera substanciación no requieren fundamento legal.

Art. 51. Los autos interlocutorios que decidan artículo o causen gravamen irreparable en que no se observe lo dispuesto en el artículo 49, serán nulos y su nulidad podrá declararse de oficio.

Art. 52. El Juez que omita cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo 49, incurrirá en multa de veinte a cien pesos, según la frecuencia e importancia de la omisión. El hecho se pondrá en conocimiento de la Suprema Corte para que sea agregado al legajo personal del Juez.

Art. 53. El Juez o Tribunal que conozca de una causa puede pedir la extradición del reo o condenado que se hubiese refugiado en extraña provincia o en el extranjero, debiendo observar las siguientes reglas:

1º: Si se trata de la extradición interprovincial se acompañará copia legalizada del auto de prisión u orden de detención cuando la persona cuya extradición se solicita sea un procesado y se acompañará copia legalizada de la sentencia si es un condenado.

2º: Si se trata de extradición a solicitarse de país extranjero, se observarán las reglas que determinan los tratados existentes o el principio de reciprocidad o práctica aceptado por la nación requerida.

Art. 54. Mientras no se sancione la Ley Orgánica de los Tribunales será aplicable en materia penal, en lo pertinente y en cuanto no contrarién las disposiciones de este Código, los artículos 13 a 18, 50, 54, 75, 76, 303, 304 y 959 del de Procedimientos en lo Civil y la ley de 21 de julio de 1914 sobre funcionamiento de las Cámaras de Apelación.

LIBRO SEGUNDO

SUMARIO

TITULO I

Bases para su iniciación

CAPITULO I

DENUNCIA



Art. 55. Toda persona, por sí o por sus representantes legales, puede denunciar la perpetración de un delito de acción pública. Si la denuncia es infundada o no se refiere a hechos que constituyen delito, se mandará archivar sin más trámite.

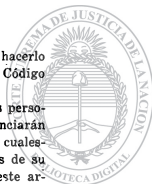
Art. 56. La denuncia puede hacerse verbalmente o por escrito, personalmente o por mandatario con poder especial, a los Jueces de Instrucción o a los funcionarios de policía. Estos, dentro de las veinticuatro horas, la pondrán en conocimiento del Juez competente.

Art. 57. El funcionario que reciba una denuncia hará constar la identidad del denunciante por la libreta de enrolamiento o por dos testigos, o por juramento si le fuese desconocida o hará mención expresa de su conocimiento y requerirá todos los datos y antecedentes que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos. Si el denunciante fuere desconocido o no supiere firmar, se le tomarán las impresiones digitales.

Art. 58. No se admitirá denuncia de descendientes contra ascendientes, consanguíneos o afines o viceversa; ni de un cónyuge contra otro, ni de hermano contra hermano. Esta prohibición no comprende la denuncia de delito ejecutado contra el denunciante o una persona cuyo parentesco con el denunciante sea más próximo que el que lo liga con el denunciado.

Art. 59. Los funcionarios y empleados públicos que en el desempeño de sus cargos adquieran el conocimiento de la perpetración de un delito que dé nacimiento a la acción pública, estarán obligados a denunciarlo a la autoridad competente. En caso de no hacerlo, incurrirán en las responsabilidades establecidas en el Código Penal.

Art. 60. Los empleados de policía tienen la obligación de denunciar todo delito de acción pública, cualquiera que sea la for-



ma en que haya llegado a su conocimiento. En caso de no hacerlo incurrirán en las responsabilidades establecidas en el Código Penal.

Art. 61. Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que profesan cualquier ramo del arte de curar, denunciarán dentro de las veinticuatro horas los atentados personales, cualesquiera que sean, en los que hayan prestado los servicios de su profesión. Se exceptúa de la obligación impuesta por este artículo, el caso en que las personas mencionadas hubieran tenido conocimiento del delito por revelaciones hechas por la persona directamente interesada, bajo secreto profesional.

Art. 62. El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento judicial ni incurre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia. Las costas originadas a consecuencia de denuncias evidentemente falsas o presentadas con injustificable ligereza, se declararán a cargo del denunciante, después de oírle breve y sumariamente. El auto que se dicte en este caso es apelable dentro del término de cuarenta y ocho horas.

CAPITULO II

ACCIONES

Art. 63. Corresponde al Ministerio Fiscal el ejercicio de todas aquellas acciones penales que deben iniciarse de oficio, conforme al artículo 71 del Código Penal.

Art. 64. Para el ejercicio de las acciones dependientes de instancia privada que establece el artículo 72 del Código Penal, se observarán las prescripciones determinadas en esa disposición.

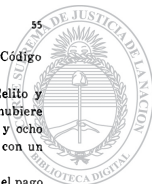
Art. 65. Tratándose de las acciones privadas previstas en el artículo 73 del Código Penal se aplicarán los preceptos contenidos en los artículos 74, 75 y 76 del mismo Código.

Art. 66. La indemnización de los daños y perjuicios causados por los delitos se establecerá en la forma y modo que fija el artículo 219, inciso 3°.

CAPITULO III

INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR DAMNIFICADO

Art. 67. El particular damnificado por un delito de los que dan lugar a la acción pública, podrá intervenir en el juicio en todas sus instancias, personalmente o por mandatario letrado



con poder especial, pero sólo con las facultades que este Código establece, pudiendo:

1° Solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables. Si el Juez desechare las que hubiere propuesto, podrá apelar dentro del término de cuarenta y ocho horas, debiendo formarse incidente por separado, el que, con un informe, será elevado al Superior para que lo resuelva.

2° Pedir el embargo de bienes suficientes para asegurar el pago de la indemnización civil y costas.

El embargo procederá cuando se haya dictado la prisión preventiva del acusado o haya sido puesto en libertad provisoria o excarcelado bajo fianza, y el Juez fijará la cantidad por la que ha de hacerse efectivo. Este auto es apelable dentro del término de cuarenta y ocho horas y al solo efecto devolutivo.

3° Asistir a la indagatoria del prevenido y a las declaraciones de los testigos, con facultad para tachar y repreguntar a éstos.

4° Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa.

5° Interponer recurso de apelación y nulidad del auto de sobreseimiento y, en el juicio oral, los recursos autorizados contra la sentencia.

Si la intervención personal obstaré a la marcha regular del juicio, el Juez podrá exigir que sea representado por letrado.

Art. 68. Entran en la calificación del artículo anterior el que ha sido víctima, damnificado u ofendido por el delito y sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuge no divorciado. Estos últimos intervendrán en el juicio únicamente a falta de los primeros y la inacción del pariente más próximo excluye la intervención de los otros, debiendo observarse el siguiente orden de prelación: cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos.

Art. 69. Para tomar la intervención a que se refiere el artículo 67, el damnificado no tendrá que ser citado y deberá presentarse espontáneamente fijando domicilio legal, sin hacer retrogradar la causa. No reviste el carácter de parte y se le notificará únicamente el auto de sobreseimiento y la sentencia.

Art. 70. La intervención del particular damnificado en el juicio oral ante la Cámara, es la que se establece en el Libro III Sección I, Título I, de este Código.

CAPITULO IV

QUERELLA

Art. 71. El ofendido por un delito de acción privada o dependiente de instancia privada podrá querellarse y promover en tal carácter el juicio penal. Si se trata de un incapaz, el ejercicio de la acción incumbe a su representante legal o guardador.

Art. 72. La querella se promoverá siempre por escrito y deberá expresar:

1° El nombre, apellido y domicilio del querellante.

2° El nombre, apellido y domicilio del querellado.

En caso de ignorar esta circunstancia, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor pudieren darle a conocer.

3° La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, en cuanto fuere posible.

4° Las diligencias que se consideren necesarias para la comprobación del hecho.

5° La firma del querellante.

Si no supiere o no pudiere firmar, deberá poner en el escrito su impresión digital en presencia del Secretario, quien dejará constancia de ese hecho en el cargo.

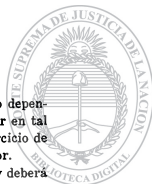
La disposición del artículo 67, inciso 2°, es aplicable al querellante.

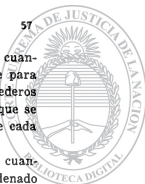
Art. 73. El querellante que desista de la querella no podrá renovarla en adelante y quedará sujeto a las responsabilidades que establezca la sentencia.

Si el delito es de aquellos que dan nacimiento a la acción dependiente de instancia privada, el desistimiento del querellante no impide la continuación de la causa.

Art. 74. El querellante podrá presentarse personalmente o por medio de mandatario letrado con poder especial. Si su intervención personal obstare a la marcha regular del juicio, el Juez podrá exigir que sea representado por letrado.

Art. 75. Se tendrá por desistido de la querella al que pidiere el sobreseimiento, adhiriere al solicitado por otro o al que, después de cinco días de habersele intimado de oficio o a petición de parte, no repusiere los sellos o no abonare las costas en que hubiese sido condenado, o no urgiere, sin justa causa, el procedimiento.





Art. 76. Se tendrá también por abandonada la querella cuando, por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla, dentro del término que se fije teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

Art. 77. El querellante contrae responsabilidad personal cuando hubiere procedido maliciosamente y será siempre condenado en las costas, cuando se le dé por desistido de su acusación o se deseché la misma. El auto que se dicte en este caso, así como en el de los artículos 74, 75 y 76 es apelable dentro del término de cuarenta y ocho horas.

CAPITULO V

INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO

Art. 78. En la instrucción del sumario se observarán las siguientes reglas:

1° Se practicarán sin demora las diligencias necesarias para comprobar la existencia del hecho punible y de las personas responsables de su ejecución.

2° Se decretará la detención del presunto culpable en los casos y en la forma que este Código autoriza.

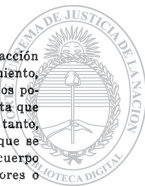
3° Se adoptarán las medidas para que no se altere la situación de todo lo relativo al objeto del delito y estado del lugar en que fué cometido.

4° Se ordenará, cuando ello sea conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del delito o sus adyacencias antes de cumplirse las primeras diligencias.

5° Se empleará la fuerza pública cada vez que sea necesario para la realización de las diligencias respectivas.

6° Se requerirá al médico de policía del lugar o al de los Tribunales o al primero que fuere habido, para que preste los auxilios de su profesión y dé los informes pertinentes.

En el último de los casos, el médico que se niegue a cumplir lo dispuesto en este artículo será castigado con multa de veinte a doscientos pesos, que aplicará el Juez como corrección disciplinaria la primera vez y arresto hasta por diez días si fuere reincidente. Este auto es apelable por el médico penado dentro de las veinticuatro horas.



Art. 79. La formación de los sumarios por delitos de acción pública que en cualquier forma llegaren a su conocimiento, corresponde a los Jueces de Instrucción. Los funcionarios policiales deben prevenir en la instrucción del sumario hasta que el Juez se haga cargo del mismo realizando, mientras tanto, los diligencias urgentes; considerándose por tales las que se dirijan a impedir que pueda variar la condición del cuerpo del delito, la situación de los presuntos autores, coautores o cómplices, o que desaparezcan las pruebas tendientes a la comprobación del hecho delictuoso y de la responsabilidad o inocencia del imputado.

Art. 80. Llegado a conocimiento de la Policía la comisión de un hecho delictuoso, lo pondrá en conocimiento inmediato del Juez de Instrucción que corresponda, procediendo a practicar las medidas urgentes.

Los funcionarios de policía actuarán con un secretario mayor de diez y ocho años.

Art. 81. El Juez debe avocarse de inmediato la instrucción del sumario, notificando al Agente Fiscal para que tome la debida intervención.

Los funcionarios policiales seguirán como auxiliares del Juez.

Art. 82. El Juez, al hacerse cargo del sumario, procederá por sí a la ratificación de las diligencias practicadas por la Policía en caso de que lo creyere conveniente o cuando fueren defectuosas o irregulares.

Art. 83. Las citaciones y emplazamientos se harán por escrito expresando el objeto de las mismas, por medio de órdenes directas a las autoridades policiales, aún para obtener en el momento la comparecencia de los citados y sin que sean substanciales otras formalidades.

Art. 84. Cuando el Juez a quien corresponda intervenir, estuviera instruyendo otro sumario fuera del asiento del Juzgado, intervendrá su reemplazante legal, quien deberá hacerse cargo inmediatamente de la instrucción.

Art. 85. Cada vez que el Juez de Instrucción deba ausentarse de la sede del Juzgado en el desempeño de sus funciones, lo comunicará a la Suprema Corte y a su reemplazante legal.

Art. 86. Terminadas las diligencias que deban practicarse en el lugar del hecho, el Juez proseguirá el sumario en la sede del Juzgado, siempre que ello no obstaculice la marcha regular del mismo.



Art. 87. El Juez de Instrucción o el funcionario policial cuando interviene a los efectos determinados en el artículo 79, podrán decretar el secreto del sumario y la incomunicación del detenido siempre que para ello existiera causa bastante que se expresará en la resolución. Esas medidas no podrán exceder de cinco días, si bien el Juez está facultado para acordarlas nuevamente, por igual término, en auto motivado, bajo su responsabilidad.

Art. 88. El Juez de Instrucción podrá ordenar directamente a los Comisarios de Policía de partido, la ejecución de diligencias en los sumarios en que intervenga, dentro de los límites de la jurisdicción de dichos funcionarios.

TITULO II

Comprobación del delito y averiguación del delincuente

CAPITULO I

DILIGENCIAS PRELIMINARES

Art. 89. Si el delito cuya investigación se persigue ha dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el Juez los hará constar en el sumario, reuniéndolos, además, inmediatamente y conservándolos si fuere posible.

Art. 90. Si es habida la persona o cosa objeto del delito, el Juez describirá detalladamente su estado y circunstancias.

En los casos de muerte por heridas deberá consignarse la naturaleza, situación y número de ellas, haciendo además constar la posición en que se hubiera encontrado el cadáver y la de los rastros de sangre y demás que se notare.

Art. 91. Si las circunstancias que se observen en la persona o cosa pudiere ser mejor apreciada por peritos, el Juez hará el nombramiento de éstos, haciéndose constar por diligencia el reconocimiento y el informe que expidieren.

Art. 92. El Juez podrá disponer la reconstrucción del hecho, pero ésta no se realizará con intervención de los procesados sin su conformidad.

Si fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará un plano del lugar suficientemente detallado o se tomará fotografía, o se hará el retrato de las personas que hubiesen sido objeto del delito, o la copia o dise-



ño de los objetos o instrumentos del mismo. El plano, fotografía, copia o diseño, se unirá a los autos.

Art. 93. El Juez procurará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones o en poder del reo o de otra persona, extendiendo diligencia con expresión del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraron y describiéndolos minuciosamente, para que se pueda formar idea cabal de los mismos y del lugar y circunstancias de su hallazgo.

La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueron hallados, notificándose a la misma el auto que manda recogerlos.

Art. 94. Si en el acto de describirse a la persona o cosa objeto del delito y los lugares, armas, instrumentos o efectos relacionados con el mismo estuvieron presentes o fueron reconocidos por personas que puedan declarar acerca del modo en que aquél hubiese sido cometido y de las causas de las alteraciones que se observaren en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos o acerca de su estado anterior, serán examinadas inmediatamente después de la descripción.

Art. 95. Los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el artículo 93 se sellarán si fuese posible, ordenándose su retención y conservación. El dinero será depositado en el Banco de la Provincia a la orden del Juez que instruye el sumario.

Las diligencias a que esto diere lugar, se firmarán por la persona en cuyo poder se hubieran encontrado, o en su defecto por dos testigos.

Si los objetos no pudieren, por su naturaleza, conservarse en su forma primitiva, el Juez acordará lo que estime más conveniente para conservarlos del mejor modo posible.

Art. 96. Si no aparecen huellas o vestigios del delito, el Juez averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionalmente; las causas de la misma o los medios que para ello se hubieren empleado, procediendo enseguida a recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquier otra clase que se puedan adquirir de la perpetración del delito.

Art. 97. Si el delito fuere de los que no dejan huellas materiales de su perpetración, el Juez procurará hacer constar por

declaración de testigos y por los demás medios de comprobación, la ejecución del delito y sus circunstancias, así como la preexistencia de la cosa, cuando hubiese tenido por objeto la sustracción de la misma.

Art. 98. Si la instrucción tuviere lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de procederse al entierro del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, hecha la descripción ordenada por el artículo 90, se identificará por medio de testigos que a la vista del mismo den razón satisfactoria de su conocimiento. Se tomarán asimismo las impresiones digitales del cadáver.

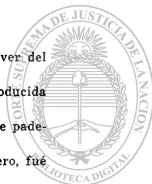
Art. 99. No habiendo testigos de conocimiento, si el estado del cadáver lo permitiera, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, por tiempo a lo menos de veinticuatro horas, anunciándose por la prensa o carteles, el sitio, hora y día en que se hubiese hallado y el Juez que estuviese instruyendo el sumario, a fin de que quien tenga algún dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver o al esclarecimiento del delito o su circunstancia, lo comunique a dicho Juez.

Art. 100. Si apesar de tales prevención no fuera el cadáver reconocido, recogerá el Juez todas las prendas del traje con que se le hubiese encontrado, a fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación.

Art. 101. En los sumarios a que se refiere el artículo 98, cuando por la percepción exterior no aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por el médico de los Tribunales o por el de la Policía, o por ambos conjuntamente cuando el Juez lo reputé necesario. El perito o peritos encargados de la autopsia deberán describir exactamente la operación e informarán sobre la naturaleza de las heridas o lesiones. Los médicos deberán expresar en su informe, en cuanto sea posible, la clase y condiciones del arma empleada, haciendo la descripción detallada de la misma, y el origen del fallecimiento y sus circunstancias.

En todos los casos, sea cual fuere el procedimiento empleado para el reconocimiento de las heridas o lesiones, los peritos deberán manifestar si en su opinión la muerte ha sobrevenido a consecuencia de aquéllas o si ha sido el resultado de causas preexistentes o posteriores, extrañas al hecho consumado.





Art. 102. En los casos en que se extraiga un cadáver del agua, se averiguará:

1° Si la muerte ha sido resultado de la asfixia producida por el agua.

2° Si ha sido causada por alguna enfermedad de que padeciera el ahogado.

3° Si habiendo recibido la muerte por acto de tercero, fué después arrojado al agua el cadáver.

Art. 103. En los casos de lesiones corporales, el Juez ordenará que los peritos determinen prolijamente en su informe la situación y naturaleza de esas lesiones y las armas o instrumentos empleados para producirlas.

Tendrán en cuenta los peritos si concurren en las lesiones algunas de las circunstancias siguientes, para establecerlas en su informe:

1° Si le han producido una debilitación permanente de la salud, de un órgano, de un sentido o de un miembro.

2° Si le han ocasionado una dificultad permanente de la palabra.

3° Si han puesto en peligro su vida.

4° Si ha sido inutilizado para el trabajo por más de un mes.

5° Si le han causado una deformación permanente del rostro.

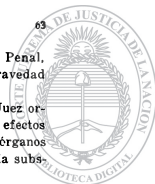
6° Si le han ocasionado una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable.

7° Si lo han inutilizado de manera permanente para el trabajo.

8° Si le han producido la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro o del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir.

Art. 104. Tratándose del delito de homicidio previsto en el artículo 81 inciso 2° del Código Penal, el Juez hará que el perito exprese en su informe, además de la circunstancia a que alude el citado artículo, si la criatura ha nacido viva, el tiempo que ha vivido, las causas que razonablemente le hayan podido producir la muerte y si en el cadáver se notan o no lesiones.

Art. 105. En el caso de aborto se hará constar la preexistencia de la preñez, los signos demostrativos de la expulsión violenta del feto o embrión, las causas que hayan determinado el hecho y las circunstancias de haber sido provocado por la madre o por algún extraño, de acuerdo o contra la voluntad de



aquella, y los demás antecedentes que, según el Código Penal, deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter y gravedad del delito, o su justificación.

Art. 106. En los casos de envenenamientos deberá el Juez ordenar que se practique la autopsia para determinar los efectos que el veneno pueda haber producido sobre los distintos órganos y que sirvan para comprobar la causa de la muerte y la sustancia que la haya producido.

Deberá, asimismo, ordenar el análisis químico del veneno y de las sustancias a que se atribuye ese carácter, para lo cual mandará recoger todas las cosas que puedan servir de base a la operación.

Art. 107. Si se trata de robo o de cualquier otro hecho cometido con efracción, violencia o escalamiento, el Juez hará constar y describir las huellas y rastros del delito, ordenando que los peritos expliquen de qué manera, en qué circunstancias, con qué instrumentos o medios y en qué época consideran que el hecho ha sido verosimilmente ejecutado.

Hará también constar, en su caso, si el robo se ha cometido en despoblado o con el concurso de varias personas, o en despoblado y con armas, o en lugares poblados y con el concurso de varias personas.

Art. 108. En los delitos de robo, hurto, estafa y en cualquiera otro en que deba hacerse constar la preexistencia de las cosas sustraídas, si no hubiese testigos presenciales del hecho, se recibirá información sobre los antecedentes del que se presentare como agraviado, y sobre todas las circunstancias que ofrecieren indicios de hallarse en posesión de aquellas al tiempo en que resulta cometido el delito.

Art. 109. En los casos de falsedad cometida en instrumento público o privado, se hará por peritos el cotejo de los verdaderos con los falsos; si se tratare de falsedad que se comete contrahaciendo o imitando letra, firma, sello o marca, el Juez mandará practicar también por peritos el cotejo de la firma, sello, letra o marca, argüidos de falsos, con otros indubitados.

Art. 110. Si por tratarse de falsificación cometida en instrumentos públicos o efectos existentes en dependencias del Estado hubiere imprescindible necesidad de tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del Juez, se reclamarán de las oficinas o autoridades correspondientes, sin perjuicio de devolverlos después de terminada la causa.



Art. 111. En los casos de incendio, explosión o inundación, el Juez hará que los peritos dictaminen si ha habido peligro común para los bienes, para algún archivo público, biblioteca o museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotécnia militar o parque de artillería; si ha sido causa inmediata de la muerte de alguna persona, o la ha puesto en peligro de muerte.

Deberá igualmente determinarse la importancia aproximativa de los daños y perjuicios ocasionados por el incendio, explosión o inundación.

Art. 112. En todos los delitos que causen daño o pérdida o entrañasen la amenaza de un peligro para los bienes, el Juez deberá comprobar la fuerza o astucia empleada, los medios o instrumentos de que se haya servido el delincuente, la extensión del daño recibido o por recibirse, la gravedad del perjuicio para los bienes o para la vida, la salud o la seguridad de las personas, y las demás circunstancias previstas por el artículo 184 del Código Penal.

Art. 113. Tratándose de los delitos de violación, estupro, abandono de personas, abuso deshonesto, privación de la libertad y contra la salud pública, se harán constar todas las circunstancias que sirvan para la determinación y calificación de los mismos.

Art. 114. Si en caso de accidente en las líneas férreas se produjere la muerte o lesión de alguna persona, el conductor del tren hará detener a éste para recoger al muerto o herido, haciendo constar, ante todo, su situación y estado, y dará aviso sin demora a la autoridad policial más próxima para que ésta comunique el hecho al Juez competente.

El conductor o jefe del tren al dar cuenta del hecho, manifestará su nombre y domicilio, y el de las personas conocidas que viajaran en él.

CAPITULO II

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

Art. 115. Si existiere motivo bastante para sospechar que una persona es autor, coautor o cómplice de un delito, el Juez procederá a recibirle declaración indagatoria.

Art. 116. Si el imputado estuviere detenido, la declaración indagatoria se recibirá dentro de las veinticuatro horas de su detención.



Este término puede prorrogarse por veinticuatro horas más si lo pidiere para nombrar defensor.

Art. 117. Si el imputado se negare a declarar se hará constar por acta en el proceso, que deberá firmar con el Juez, el defensor si concurriere, y el Secretario.

La negativa a declarar no implica presunción en su contra.

Art. 118. El imputado será preguntado por su nombre, apellido, edad, nacionalidad, domicilio, estado, profesión, y sobre el hecho que motiva su detención.

Art. 119. Se permitirá al declarante manifestar cuanto tenga por conveniente para su descargo o para la explicación de los hechos, evacuándose con urgencia las citas que hiciere y las demás diligencias que propusiere si el Juez las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones efectuadas.

Art. 120. Las preguntas dirigidas al indagado serán siempre claras y precisas, prohibiéndose las que sean ambiguas o capciosas, pudiendo aquél reponder sin precipitación.

Art. 121. Cuando la indagatoria se prolongara mucho tiempo o cuando se notara en el indagado síntomas de fatiga o alguna anomalía, o a su pedido, se suspenderá el acto hasta que hayan desaparecido las causas que motivaron la interrupción o lo solicite el interrogado.

Art. 122. Antes de prestar declaración indagatoria, el Juez le hará saber al indagado las disposiciones de los artículos 117, 120 y 121 de este Código.

Art. 123. El imputado podrá dictar por sí mismo su declaración. Si no lo hiciere lo hará el Juez procurando, en cuanto fuere posible, consignar las mismas palabras de que aquél se hubiese valido.

Art. 124. Si el declarante fuese sordomudo y supiere leer se le harán por escrito las preguntas; si supiere escribir contestará por escrito, y si no supiere leer ni escribir, se le nombrará intérprete, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán las contestaciones.

Será nombrado intérprete un maestro de sordomudos, si lo hubiese en el lugar y, en su defecto, cualquiera que supiera comunicarse con el interrogado.

El nombrado prestará juramento en presencia del sordomudo antes de comenzar a desempeñar el cargo.



Se procederá también a nombrar intérprete cuando el declarante no supiere el idioma nacional. En lo posible se designará un profesor de idiomas.

Esos servicios serán carga pública.

Art. 125. Concluída la declaración indagatoria, el imputado podrá leerla por sí mismo y el Juez le hará saber que le asiste este derecho. Si no lo hiciere por sí o su defensor, el Secretario la leerá íntegramente, bajo pena de nulidad, haciéndose mención expresa de la lectura. En este acto, el interrogado manifestará si se ratifica en su contenido y si tiene algo que añadir o enmendar.

Art. 126. La declaración bajo pena de nulidad será firmada por todos los que han intervenido en ella; y si el declarante no supiere o no pudiera hacerlo pondrá la impresión digital. Si se negare a firmar o a poner la impresión digital, firmarán la declaración dos testigos hábiles que no podrán ser empleados del Juzgado, y cuyo nombre, profesión y domicilio se consignará en el acta.

Art. 127. No se harán enmiendas, raspaduras o correcciones en la diligencia de la declaración, debiendo salvarse las faltas o errores que se hubieran cometido al final de la misma.

Art. 128. Concluída la declaración indagatoria o negándose a prestarla, se hará saber inmediatamente al imputado la causa de la formación del proceso o la de su detención si se hallare privado de su libertad y también el derecho que tiene a nombrar defensor si no lo hubiere nombrado con anterioridad, nombramiento que podrá hacer en el mismo acto, y que, mientras tanto, será defendido por el Defensor de Pobres.

El Juez le comunicará, además, si el delito por el que se le procesa es excarcelable y el monto de la caución que deberá prestar para obtener la libertad provisional, cuando no proceda sin ese requisito.

El procesado podrá declarar cuantas veces desee ante el Juez, quien le recibirá inmediatamente la declaración, si tuviese relación con la causa.

CAPITULO III

IDENTIDAD DEL PROCESADO

Art. 129. En los casos en que se impute la perpetración de un hecho punible a persona cuyo nombre se ignore o fuere común a varias, el Juez o funcionario encargado de la instruc-



ción ordenará el reconocimiento de ésta por el que le hubiere dirigido la imputación o cargo.

Art. 130. La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarla la persona que ha de ser reconocida, haciéndola comparecer con otras de circunstancias exteriores semejantes.

En presencia de ellas, el que debe practicar el reconocimiento manifestará, bajo juramento si es testigo, si encuentra en la rueda o grupo de personas a quién hubiese hecho referencia en su declaración, designándola, en caso afirmativo, clara y terminantemente.

En la diligencia que se extienda se harán constar todas las circunstancias del acto así como los nombres de todos los que hubieren formado la rueda o grupo y será firmada por el Juez, el Secretario, el que ha practicado el reconocimiento y el reconocido, observándose las reglas del artículo 126.

Art. 131. El que deba ser examinado puede elegir el punto en que quiera colocarse entre los que le acompañan y pedir que se excluya de la reunión a cualquier persona que juzgue sospechosa. El Juez podrá limitar el uso de ese derecho cuando crea que se obra con malicia.

Art. 132. A fin de que puedan servir como prueba de identidad, se harán constar con la minuciosidad posible las señas personales del procesado.

CAPITULO IV

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL PROCESADO

Art. 133. En todos los casos el Juez, antes de proseguir el sumario y con la urgencia que el caso requiera, ordenará el exámen facultativo del acusado a efectos de establecer si concurren algunas de las circunstancias previstas en el artículo 34 inciso 1º del Código Penal.

Procurará comprobar, también, las circunstancias personales del procesado que puedan tener influencia para determinar el grado de su responsabilidad.

Art. 134. Cuando se decrete por los Jueces o Tribunales el examen médico-legal dispuesto en el artículo anterior, los peritos, al presentar su dictamen, deberán informar, en caso de enajenación, si conforme a los principios de su ciencia o

arte, la convivencia del procesado en libertad es peligrosa para la seguridad social.

Art. 135. Si de las conclusiones del informe médico resultara peligrosa la libertad del procesado, al decretar el sobreseimiento, o al absolver, se ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento de alienados. La reclusión se mantendrá hasta que hayan desaparecido las causas que la motivaron, lo que se resolverá por el Juez o Tribunal que corresponda previo examen médico - legal.

En los demás casos previstos en el inciso 1° del artículo 34 del Código Penal, se procederá como se establece en la última parte del mismo.

TITULO III

Testigos

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

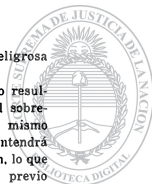
Art. 136. Se procederá a recibir declaración a todas las personas que se creyere que tienen conocimiento de hechos que se relacionen con el delito o sus autores, coautores o cómplices. Si algún testigo de éstos no fuere examinado, se pondrá constancia de la causa que haya obstado al examen.

Art. 137. Todo habitante de la Provincia, que no esté impedido, tiene obligación de concurrir a declarar ante el Juez de la circunscripción en que tuviere su domicilio.

Art. 138. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior:

1° Las personas que no puedan comparecer al Juzgado por enfermedad, edad avanzada o decoro de sexo, en cuyo caso el Juez con su Secretario se trasladarán a su domicilio donde les recibirá la declaración.

2° Los primeros magistrados de la Nación y de la Provincia, los Ministros, Jefe de Policía, los prelados, los individuos del senado del clero, los del Congreso Nacional y Cámaras provinciales, los de los Tribunales Superiores, los Jueces, los miembros del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados y del Tribunal de Cuentas, los jefes militares desde Coronel inclusive y Agentes diplomáticos, los cuales prestarán su declaración por medio de informe.





Art. 139. Están exentos de prestar declaración como testigos:

1° Los eclesiásticos sobre los hechos que les hayan sido revelados en la confesión.

2° Los defensores de un acusado respecto de lo que les haya sido confiado en esa calidad.

3° Los abogados y procuradores cuando se trate de hechos o circunstancias de que hayan tenido conocimiento por las revelaciones hechas por sus clientes en el ejercicio de su ministerio.

4° Los médicos, farmacéuticos, parteras y toda otra persona sobre los hechos que por razón de su profesión les haya sido confiado bajo secreto profesional.

5° Las personas que al tiempo de declarar no se encuentren por razones de su estado físico, moral o mental, en estado de decir la verdad.

Art. 140. No podrán ser llamados ni admitidos como testigos con la excepción del artículo 58, *in fine*, o si fuesen presentados por el procesado en el interés de la defensa, o si lo hicieren espontáneamente, en cuyo caso se les hará presente que solo pueden hacerlo en ese sentido:

1° El cónyuge del procesado, aun cuando esté legalmente separado.

2° Sus ascendientes o descendientes legítimos o naturales legalmente reconocidos.

3° Sus hermanos legítimos o naturales reconocidos.

4° Sus afines hasta el segundo grado.

5° Los tutores y pupilos recíprocamente.

Art. 141. No pueden ser testigos sino para simples indicaciones y al solo efecto de la indagación sumaria:

1° Los menores de quince años.

2° Los procesados por algún delito y los condenados a pena corporal, durante el tiempo de la condena, salvo el caso de delito perpetrado en el establecimiento donde el testigo se hallare preso.

3° Los que incurran en contradicciones graves, en falsedades manifiestas o hayan sido condenados por falso testimonio.

4° Los que no tengan domicilio conocido, industria o profesión, o gocen de mala fama, salvo las prostitutas respecto de los delitos cometidos en los prostíbulos.



5° Los que se encontraren en estado de completa ebriedad en el momento de verificarse el hecho sobre que deponen.

6° Los parientes del querellante, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o colaterales del procesado en el mismo grado.

7° Los amigos íntimos y domésticos del querellante o del procesado y los que de éstos hubiesen recibido beneficios de importancia, antes o después de perpetrado el delito.

8° Los que tengan con el querellante o procesado enemistad, odio o resentimiento que se conozca por hechos manifiestos.

9° Los que tengan interés en el resultado de la causa.

10. Los que tuvieren pleito pendiente con el querellante o el procesado.

11. Los denunciantes cuando tal hecho los afecte directamente, salvo a petición del procesado y en interés de la defensa.

12. Los acreedores, fiadores o deudores del querellante o del procesado, y sus dependientes y socios, salvo que la sociedad fuese anónima.

13. Los que hubiesen practicado diligencias o dado recomendación en contra del procesado o en favor del querellante.

14. Los que declaren de ciencia propia sobre hechos que no pueden apreciar por carencia de facultades o de aptitudes o por imposibilidad material que resultare probada.

15. Los que tengan impedimento para exponer sus ideas de palabra o por escrito.

Art. 142. Las inhabilidades declaradas de parentesco o amistad, enemistad, vínculo social o dependencia, sólo tienen lugar cuando los testigos puedan ser inspirados por interés, afecto u odio.

La misma regla deberá observarse en todas las demás inhabilidades que se funden en la presunción de parcialidad del testigo, por su situación personal respecto del querellante o del procesado.

Las disposiciones que se refieren al querellante serán aplicables a la persona particularmente ofendida por el delito, cuando intervenga en el juicio penal.

Art. 143. Si el testigo no compareciere el día señalado o se negare a declarar sin causa justificada, se observarán las siguientes reglas:

1º En caso que no obedeciere a la primera citación se le hará comparecer por la fuerza pública a la audiencia siguiente.

2º Si se negare a declarar se le tendrá arrestado por cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra por su desobediencia.

Art. 144. Cada testigo deberá ser examinado separadamente por el Juez en presencia del Secretario bajo pena de nulidad.

Antes de declarar prestará juramento o prometerá decir verdad de todo lo que supiere o le fuere preguntado y será instruido de las penas en que incurren los que se producen con falsedad. Exceptúanse de estas formalidades los menores de quince años.

Será además, preguntado por su nombre, apellido, estado, edad, profesión y domicilio, si conoce al procesado y si le afecta alguno de los impedimentos o inhabilidades legales que le incapacite para declarar que le serán explicados.

Si el Juez lo considera conveniente o cuando se trate de personas desconocidas que no sepan escribir o sin domicilio, le tomará las impresiones digitales que se agregarán a los autos. Lo mismo se hará cuando lo pida el acusado. En cada una de las fojas de la declaración se tomará la impresión de uno de los dedos del testigo en los casos del párrafo anterior.

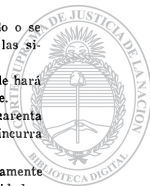
Art. 145. En caso de que el testigo sea ciego o no sepa leer ni escribir, el Juez nombrará para que le acompañe una persona mayor de edad que firmará la declaración después que aquél la hubiese ratificado, bajo pena de nulidad.

Es aplicable a los testigos en lo pertinente, lo dispuesto respecto a la declaración del imputado.

Art. 146. Para los casos a que se refiere el artículo anterior, y para otros semejantes, no podrá servir de testigo el que sea dependiente del Juzgado.

Si el objeto presentado fuere algún escrito será rubricado por el Juez y por el testigo que lo ofreciere, o por el Secretario en caso de que el testigo no supiere hacerlo.

Art. 147. En las declaraciones que se presten evacuando citas, no se leerá al testigo la diligencia en que ésta se hubiere hecho constar.





Tampoco se le leerá su declaración cuando se le llame a declarar nuevamente en el juicio oral, si así lo pidiere alguna de las partes.

Art. 148. No se consignarán en los autos las declaraciones de los testigos que, según el Juez, fueren manifiestamente inconducentes para la comprobación de los hechos objeto del sumario.

Tampoco se consignarán en cada declaración las manifestaciones que se hallaren en el mismo caso, pero se designará siempre todo lo que pueda servir de cargo como de descargo al procesado.

Art. 149. Si de la instrucción aparece que algún testigo se ha producido con falsedad, se mandará compulsar las piezas conducentes para la averiguación de este delito y se formará separadamente el debido proceso.

CAPITULO II

CAREOS

Art. 150. Toda vez que durante la instrucción el Juez estimare que por medio de careos puede llegar al descubrimiento de la verdad, podrá proceder a practicarlos.

Art. 151. El acusado tendrá derecho a pedir que se le caree con los testigos de cargo.

El careo entre procesados se verificará siempre que éstos lo solicitaren como medio de defensa.

Art. 152. En el mismo acto no podrán carearse más de dos personas.

Los testigos prestarán juramento en la forma ya establecida.

Cumplida esa formalidad, se leerán en lo pertinente las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando la atención de los careados sobre las contradicciones a fin de que entre sí se reconvenzan para obtener la aclaración de la verdad.

Si persisten en su declaración, se pondrá nota en los autos que será subsrita por los careados.

Art. 153. Si se hallare ausente algún testigo que deba carearse con el procesado o con otro testigo que estuviera presente, se leerá a éste su declaración y las particularidades de las del ausente en que discordasen, y las explicaciones que dé u observaciones que haga para confirmar, variar o modificar sus anteriores asertos, se consignarán en la diligencia.

Subsistiendo la disconformidad, se librará exhorto u oficio a la autoridad que corresponda, insertando a la letra la declara-



ción del testigo ausente, la del careado presente sólo en la parte que sea necesaria y el medio careo, a fin de que se complete esa diligencia con el ausente, en la misma forma establecida para el presente.

CAPITULO III

EXAMEN PERICIAL

Art. 154. El Juez ordenará el examen pericial siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria.

Art. 155. El Juez designará uno o más peritos, según lo estime conveniente, sin perjuicio del derecho acordado por el artículo 159.

Si fuere necesario examinar cuentas, la designación de peritos de oficio recaerá en los peritos oficiales y en su defecto en miembros del Tribunal de Cuentas.

Para expedir informes sobre la capacidad o desarrollo físico o mental de los detenidos se designará a los Asesores de Menores, Defensores de Pobres y Ausentes o maestros a sueldo de la Provincia.

Si se tratare de justipreciar objetos o valores se requerirá informes de las oficinas respectivas o se designará a los funcionarios dependientes de las mismas.

En todos los casos los Jueces requerirán los servicios de funcionarios o empleados de la Provincia.

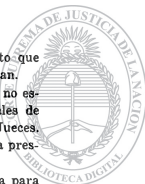
Art. 156. Los peritos deberán tener títulos de tales en la ciencia, arte o industria a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su juicio, si la profesión o arte estuviere reglamentada.

Si la profesión o arte no estuviere reglamentada, o si estándolo no hubiese peritos titulares en el lugar del juicio, podrá ser nombrada cualquier persona entendida con tal que sea mayor de edad.

Art. 157. Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento y no podrán negarse a desempeñar sus funciones si no estuvieren legítimamente impedidos.

Podrá compelérseles con multa de cien a quinientos pesos o detención hasta por veinte días.

El auto que así lo resuelva es apelable dentro del término de cuarenta y ocho horas.



Si se tratare de peritos oficiales, bastará el juramento que hayan prestado al entrar a ejercer el puesto que desempeñan.

Art. 158. No podrán prestar informes periciales los que no están obligados a declarar como testigos. Son causas legales de recusación de los peritos las que se establecen para los Jueces. El incidente se resolverá, en todo lo pertinente, en la forma prescripta por el artículo 18 de este Código.

Art. 159. Las partes podrán nombrar peritos a su costa para que procedan a llenar su cometido con los que el Juez haya designado.

Si al decretarse el examen pericial hubiese alguna persona detenida, se pondrá en su conocimiento ese hecho con la anticipación debida para que lo presencie, haga las observaciones que estime convenientes y designe perito en la forma determinada en el párrafo anterior.

Esta prescripción se observará bajo pena de nulidad, salvo cuando no fuese posible por la urgencia del caso y se tratare de comprobar las circunstancias relativas al cuerpo del delito.

Art. 160. El Juez manifestará claramente el objeto del informe.

Art. 161. Los peritos practicarán unidos las diligencias y las partes podrán asistir a ellas y hacer cuantas observaciones quieran, debiendo retirarse cuando aquéllos pasen a discutir y deliberar.

Art. 162. Los peritos emitirán su opinión por medio de declaración que se asentará en acta, exceptuándose de esta disposición los casos en que la gravedad y naturaleza del hecho requiriese la forma escrita y los informes facultativos de los profesores de alguna ciencia, los cuales podrán emitir su opinión por escrito y pedir el tiempo que necesiten para formularla.

Art. 163. El informe pericial comprenderá, si fuere posible:

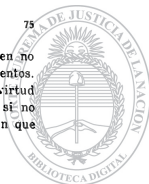
1º Una descripción de la persona o cosa que deba ser objeto del mismo, en el estado o modo en que se hallare.

2º Una relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y sus resultados.

3º Las conclusiones que, en vista de tales datos, formulen los peritos conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte.

El informe expresará, además, la fecha y hora en que se practicó la pericia.

Art. 164. Siempre que se tratare de exámenes médico-legales, será lícito a los peritos revisar las actuaciones producidas para



tomar por sí mismos los antecedentes del caso, si creyeren no ser bastantes los datos suministrados para sus procedimientos.

Art. 165. Los que prestaren informes como peritos, en virtud de orden judicial, tendrán derecho a cobrar honorarios si no tuvieren retribución o sueldo del Estado o municipio, sin que esa gestión paralice la prosecución de la causa.

CAPITULO IV

DOCUMENTOS

Art. 166. Los documentos que se presenten durante la instrucción, se agregarán a ésta haciéndose saber a las partes.

Art. 167. Las cartas de particulares sustraídas del correo o de cualquier portador no serán admitidas en juicio.

Art. 168. Las que no fueren sustraídas sólo podrán ser presentadas en virtud de mandato judicial.

Art. 169. El procesado no podrá ser obligado a reconocer documentos privados que obren en su contra, debiendo el Juez, cuando se presente un documento de esta naturaleza, interrogar al procesado si está dispuesto a declarar sobre la autenticidad del mismo, sin que su negativa le perjudique.

TITULO IV

Detención. Prisión preventiva

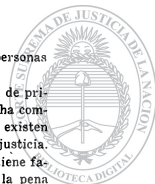
Art. 170. Fuera de los casos de pena impuesta por sentencia, la libertad de las personas puede solamente restringirse con el carácter de detención o con el de prisión preventiva.

La persona contra quien estuviere pendiente una orden de detención o de prisión, no podrá ser oída sino la acatase, salvo los casos de eximición de prisión o prescripción.

Art. 171. Toda orden de prisión o de detención, salvo delito infranganti, deberá ser por escrito y firmada por la autoridad que la ordena; y con excepción de dicho caso y el de rebeldía, nadie puede ser aprehendido sino de conformidad con las disposiciones de este Código.

Art. 172. La detención deberá decretarse cuando concurren estos dos requisitos:

1° Si existiendo prueba semi-plena o indicios vehementes del delito reprimido con pena corporal hubiere motivo fundado, que



no sea la sola denuncia, para determinar la persona o personas responsables.

2° Si la pena aplicable al procesado excede de dos años de prisión o, aunque no exceda, si el acusado es reincidente, no ha comparecido a la primera citación que se le hubiere hecho o existen motivos para creer que tratará de burlar la acción de la justicia.

Art. 173. Para acordar la libertad provisional, el Juez tiene facultad para fijar «prima facie», cuando sea necesario, la pena que correspondería imponer al procesado teniendo en cuenta la del delito y las circunstancias especiales que modifican la imputabilidad, de acuerdo con los artículos 40 y 41 del Código Penal.

No gozarán de los beneficios de la libertad provisional los autores, coautores o cómplices de los delitos de robo, hurto, defraudación y estafa, o los que estuviesen gozando de ella por delito anterior.

Art. 174. En los casos en que no proceda la detención preventiva de acuerdo con el inciso 2° del artículo 172, podrá detenerse al procesado durante cinco días, a objeto de tomarle las impresiones digitales, de recibirle la indagatoria, de que fije domicilio legal que el Juez podrá designar y del cual no le será permitido ausentarse por más de veinticuatro horas sin su autorización, de instruir las primeras diligencias sumariales y mientras se recibe la prueba de testigos en el sumario.

Vencido ese término, o antes si hubiese desaparecido la causa que motivó la detención, será puesto en libertad provisional, aun cuando no se hubiese recibido el informe de la oficina de identificación, sin perjuicio de revocarse el auto de libertad si después resultare que el procesado es reincidente o que se hallaba gozando de igual beneficio en otra causa.

Art. 175. Durante el sumario el Juez puede imponer al acusado la obligación de concurrir en señalados días al Juzgado o a la repartición policial de su residencia. Puede también prohibirle presentarse en un lugar determinado.

Art. 176. Se dejará sin efecto la libertad provisional si el encausado se ausenta del domicilio que se le hubiere fijado, no cumple la obligación de comparecer los días designados, u obstruye la prosecución de la causa o el esclarecimiento de la verdad, o infringe la prohibición establecida en la última parte del artículo anterior.

Art. 177. No procede la detención por faltas penadas con multa.



Art. 178. Puede decretarse por el Juez de Instrucción la detención de una persona por término que no exceda de doce horas, en los casos siguientes:

1° Si en el lugar de la ejecución de un delito se encontraren reunidas varias personas desconocidas y sea necesario que ellas declaren como testigos.

2° Si la averiguación del delito exige la concurrencia de alguna persona para prestar informe o declaración y se negare a hacerlo.

3° Si hubiere temor fundado de que el testigo se oculte, fugue o ausente y su deposición se considere necesaria a los objetos del esclarecimiento del delito y averiguación de la verdad.

En todos estos casos se dará constancia por escrito al interesado de la causa por qué se le detiene.

Art. 179. La detención, en los casos del artículo 172, se convertirá en prisión preventiva cuando medien conjuntamente los siguientes requisitos:

1° Que esté justificada la existencia del delito.

2° Que al detenido se le haya recibido declaración indagatoria o se haya negado a prestarla.

3° Que haya semi plena prueba o indicios vehementes para creerlo responsable del hecho como autor, coautor o cómplice.

Art. 180. El auto que declare que en el caso concurren los requisitos del artículo anterior, deberá expresar:

1° Cuáles son las constancias donde resulta acreditada la existencia del delito y de su autor, coautor o cómplice, en la forma a que se refieren los incisos 1° y 3° del artículo 179.

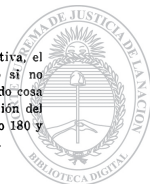
2° Si la semiplena prueba resulta de la confesión del acusado deberá extractarse la parte pertinente.

3° Si resulta de prueba testimonial, deberá decirse sintéticamente lo que de ella aparece y lo mismo se hará con el dictamen pericial.

4° Si de presunciones, se hará constar cuáles son éstas y cómo resultan acreditadas.

Art. 181. El auto de prisión preventiva deberá dictarse por el Juez dentro de los diez días de recibirle declaración al acusado y es apelable dentro del término de cuarenta y ocho horas.

Art. 182. El Juez pondrá inmediatamente en libertad al procesado tan luego como conste que se encuentra en alguno de los casos previstos por los artículos 36, 185 y 278 del Código Penal.



Asimismo, antes de dictarse el auto de prisión preventiva, el Juez puede decretar la inmediata libertad del acusado si no hallare mérito para que continúe la detención, no haciendo cosa juzgada dicho auto. Si se ordenare nuevamente la detención del acusado, el auto deberá contener los requisitos del artículo 180 y surtirá los efectos de tener al prevenido por encausado.

TITULO V

Entrada y registro en domicilio, edificio público o lugar cerrado

Art. 183. Podrá el Juez practicar pesquisas o investigaciones, sea en la habitación o domicilio del procesado o en cualquier otro lugar cuando existan indicios suficientes para presumir que allí se encuentra el presunto delincuente, o que pueden hallarse objetos útiles para el descubrimiento y comprobación de la verdad.

La resolución en que el Juez ordene la entrada y registro del domicilio será fundada en las pruebas de autos y de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución de la Provincia.

Art. 184. No se puede entrar ni hacer registros sino desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, a menos que haya peligro en la demora, o se trate de edificio o lugar público, o que el interesado o su representante preste expresamente su consentimiento.

Art. 185. Se reputan edificios o lugares públicos para la observancia de lo dispuesto en este título:

1° Los que estuviesen destinados a cualquier servicio administrativo o civil de la Nación, de la Provincia o del municipio.

2° Los que estuviesen destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos.

3° Cualquier otro edificio o lugar cerrado que no esté destinado a la habitación o residencia particular.

Art. 186. Para practicar registros en los templos o lugares religiosos y en edificios públicos de la Nación, de las Provincias o de los municipios, deberá darse aviso de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren.

Art. 187. El Juez expresará en todo auto relativo a la entrada o registro, el edificio o lugar cerrado que ha de ser su objeto, si ha de tener lugar solamente de día, la fecha en que ha de verificarse y el funcionario que lo hubiere de practicar.



Art. 188. Si la entrada o registro hubiere de hacerse en el domicilio de un particular, se notificará a éste la orden de allanamiento, o a su encargado si aquél no fuere habido.

Si no fuera tampoco habido el encargado, se hará la notificación a cualquier otra persona mayor de edad que se hallare en el domicilio, prefiriendo a los individuos de la familia del interesado.

Si a nadie se hallare, se hará constar esto por diligencia que se extenderá, siendo posible, con asistencia de dos vecinos hábiles.

Art. 189. El registro se hará en presencia del interesado o de la persona que haga sus veces.

Si aquél no fuere habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará en presencia de un individuo de su familia, mayor de edad.

Si no lo hubiere, se hará en presencia de dos vecinos hábiles.

Art. 190. Practicado el registro, el Juez hará extender acta en la que se consignará el resultado de la diligencia, haciendo constar todas las circunstancias que puedan tener alguna importancia en la causa.

La diligencia será firmada por los concurrentes y si alguno no lo hiciere se expondrá la razón.

Art. 191. Nadie podrá negarse a exhibir los objetos y papeles que se sospeche puedan tener relación con la causa.

Si el que los retenga se negare a su exhibición, será corregido con multa de cincuenta a doscientos pesos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriese por su desobediencia.

En este caso, el auto es apelable dentro del término de cuarenta y ocho horas y se procederá como lo prescribe el artículo 232.

Art. 192. El Juez o funcionario que practique el registro recogerá los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles y cualquier otra cosa que hubiese encontrado, si esto fuera necesario para el resultado del sumario.

Los libros y papeles que se recogieran serán foliados, sellados y rubricados en todas sus fojas útiles por el Juez, el secretario y el interesado o sus representantes.

Los objetos mencionados serán inventariados y colocados en lugar seguro, a disposición del Juzgado.

Art. 193. Si para apreciar la necesidad de recoger las cosas que se hubiesen encontrado en el registro, fuere necesario al-



gún reconocimiento pericial, será acordado en el acto por el Juez en la forma establecida en el capítulo «Examen pericial».

Art. 194. Si el lugar donde debe practicarse el registro se encuentra fuera del territorio de la Provincia, se encomendará la diligencia al Juez respectivo.

TITULO VI

Detención y apertura de la correspondencia epistolar y telegráfica del procesado

Art. 195. Siempre que el Juez estimare que la intercepción de los envíos y de la correspondencia postal o telegráfica que el procesado remitiere o le fueran dirigidos, puede suministrar medios para comprobar los hechos, acordará su detención, apertura y examen.

Art. 196. La detención y remisión de la correspondencia y de los envíos se ordenará a la Oficina de Correos y Telégrafos respectiva, agencias o encargados del transporte.

Art. 197. Recibida la correspondencia postal o telegráfica o los envíos, el Juez procederá a su apertura en presencia del Secretario, dejando constancia de esta diligencia.

El Juez leerá para sí el contenido de la correspondencia o examinará los envíos, y si no tuvieren relación con el proceso los devolverá al interesado, sus representantes o miembros inmediatos de su familia, bajo la debida constancia.

Art. 198. Si por el contrario existiera relación, el Juez dispondrá se agregue al proceso la correspondencia que considere necesaria a los fines de la investigación y se reserven los envíos en Secretaría.

TITULO VII

Disposiciones comunes

Art. 199. En el acto de detenerse a una persona acusada de un delito, el Juez o el Comisario de Policía procederá a tomarle las impresiones digitales, que remitirá a la Oficina de Identificación por primer correo, haciéndole saber quién es el Juez de la causa. La Oficina de Identificación enviará a dicho Juez, dentro de cuarenta y ocho horas de identificado el presunto reo, los antecedentes de éste y la individual dactiloscópica.



Art. 200. Recibida la individual dactiloscópica, el Juez ordenará, aun cuando no haya llegado el sumario a su poder, que certifiquen los Secretarios sobre los antecedentes del acusado y pedirá las causás seguidas contra el mismo. Si del informe de la Oficina de Identificación resultare que el prevenido no ha estado anteriormente procesado, se prescindirá de dicho certificado. La falta de individual dactiloscópica o de los certificados, no impedirá, en ningún caso, que la causa siga adelante, ni que se conceda la excarcelación o eximición de prisión, a menos que el procesado se haya negado a dejarse tomar las impresiones digitales.

TITULO VIII

Conclusión del sumario y su remisión a la Cámara para el juicio oral en única instancia

Art. 201. Practicadas las diligencias que el Juez haya creído necesarias para la averiguación del hecho punible y de sus autores, coautores o cómplices, si no procede sobreseer, con citación del Fiscal y el defensor y del querellante o del particular damnificado si intervinieran, remitirá las actuaciones producidas y las piezas de convicción a la Cámara que corresponda, para que la causa sea substanciada en única instancia y en juicio oral. Si hubiere algún acusado en prisión preventiva, ordenará que sea puesto a disposición del Tribunal que deba juzgarlo.

LIBRO TERCERO

PROCEDIMIENTO ORAL

TITULO I

Preliminares

Art. 202. Recibido en la Cámara el expediente, se hará saber a las partes y al particular damnificado si interviniera, para que dentro del término de diez días ofrezcan la prueba que producirán e indiquen la del sumario con la que no se conforman.

Art. 203. Vencido el término del artículo anterior, el Presidente de la Cámara procederá en la siguiente forma:

1º Hará saber a las partes el día y hora en que empezarán los debates.



2° Ordenará se cite a los testigos, peritos, etc. En la notificación se hará constar que se empleará la fuerza pública contra los que no comparezcan al llamado del Tribunal.

3° Mandará practicar, con citación de las partes y del particular damnificado, en su caso, las pruebas que sea imposible recibir en la audiencia.

4° Dispondrá que se expida pasaje oficial por la policía a los testigos, peritos u otras personas a quienes se mande comparecer y que no tengan su residencia en el lugar del juicio.

Art. 204. Si las pruebas a que se refiere el inciso 3° del artículo anterior, no se hubiesen podido practicar antes del día designado para que empiecen los debates, se diferirá la apertura de estcs.

Art. 205. Todos los días y las horas son hábiles para practicar las notificaciones.

TITULO II

Juicio oral

Art. 206. El día señalado para dar principio a los debates, concurrirán los Jueces que componen la Cámara, y a la hora designada el Presidente declarará abierta la audiencia con asistencia del Fiscal, el acusado y su defensor, el querellante o el particular damnificado si interviniese. Previamente, si existiera vacante o algún Juez gozara de licencia o estuviera impedido, se procederá a integrar el Tribunal en la forma que corresponda.

En seguida el Presidente interrogará al acusado sobre las hechos que se le atribuyen para que exprese si los reconoce o no. Si el defensor se opusiere se omitirá este trámite. Acto continuo se procederá a dar lectura de las diligencias de pruebas que, de acuerdo con las disposiciones de este Código, no deban producirse en el juicio oral y se concederá la palabra a las partes para que expongan lo que tengan por conveniente. Inmediatamente se dispondrá la recepción de la prueba ofrecida susceptible de producirse ante el Tribunal.

Art. 207. La prueba se recibirá en audiencia pública, debiendo levantarse acta de lo substancial y sin que sea necesario consignar la declaración de los testigos ni los informes de los peritos, bastando con que se haga mención del nombre, la edad, profesión y domicilio de los mismos y de que se les tomó el



juramento de ley. En análoga forma, se procederá respecto de las demás pruebas.

Podrá no obstante, consignarse alguna circunstancia especial a pedido de las partes y del particular damnificado en su caso, siempre que el Presidente lo considere procedente.

El acta será subscripta por el Presidente y el Secretario del Tribunal.

Art. 208. Después de cada declaración, el Presidente preguntará al testigo si es del acusado allí presente de quien ha entendido hablar. Preguntará asimismo, al acusado, si quiere responder a lo que se ha dicho en su contra, o repreguntar al testigo personalmente o por intermedio de su abogado. Los Jueces, el Fiscal, el querellante y el particular damnificado, tendrán también la facultad de repreguntar a los testigos.

TITULO III

Disposiciones comunes

Art. 209. El Presidente de la Cámara tiene facultades amplias a efectos de mantener el quórum del Tribunal, de hacer comparecer a fiscales, abogados, procesados, querellantes, particulares damnificados, testigos y peritos, de conservar el orden y la policía de la audiencia y de llamar a ésta a cualquier persona a los fines de la investigación.

Art. 210. En el ejercicio de las facultades que se le confieren en el artículo anterior, puede separar del conocimiento de la causa a los funcionarios inasistentes, sin motivo legal, alegado en tiempo; suspender abogados y emplear la fuerza pública cuando sea necesario.

Art. 211. Las declaraciones y las pruebas recibidas durante el sumario no pueden servir para fundar una sentencia condenatoria.

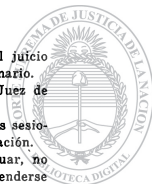
Se exceptúa:

1º Las diligencias sumariales practicadas fuera de la Provincia.

2º Si el acusado o su defensor, el querellante o el particular damnificado si interviniera y el Fiscal, hubiesen aceptado las pruebas recibidas en el sumario.

3º Si se trata de testigos que deben declarar por informe.

4º Si los peritos o testigos se encuentran gravemente enfermos y no pueden comparecer al juicio oral.



5° Si se ha hecho imposible la reproducción en el juicio oral de alguna diligencia de prueba recibida en el sumario.

6° La confesión prestada por el acusado ante el Juez de Instrucción.

Art. 212. El juicio oral continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias para su terminación.

Cada sesión, cuando hubiere diligencias que evacuar, no podrá durar menos de cuatro horas. Sólo podrá suspenderse cuando fuese necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones, o no compareciere algún testigo cuya declaración se considere necesaria o por indisposición comprobada de alguno de los Jueces del Tribunal o de alguna de las partes o sus letrados.

Art. 213. Terminado el examen de las pruebas, el Presidente concederá la palabra por orden al Fiscal, al querellante o al particular damnificado si interviniere, al defensor o defensores y, por último, al acusado o acusados, para que manifestasen lo que estimen conveniente.

Después de esto el Tribunal se retirará a deliberar para dar su veredicto.

Desde el momento en que vaya a concederse la palabra al Fiscal, el Presidente hará saber a éste, al querellante o al particular damnificado, en su caso y a los Camaristas y abogados, que ninguno puede retirarse de la casa hasta que no se pronuncie el veredicto.

Las reglas de este artículo y del anterior se observarán bajo pena de nulidad y su infracción constituye falta grave para los magistrados que intervengan en la causa.

TITULO IV

Veredicto

Art. 214. Los miembros de la Cámara, con asistencia de tres de sus vocales cuando menos, procederán fuera de la presencia de las partes y del público, a plantear y votar las cuestiones esenciales que son las que se refieren:

1° Al cuerpo del delito.

2° A la participación de los procesados en el hecho.

3° A la existencia de causas de inimputabilidad.

4° A la concurrencia de circunstancias calificativas del hecho.



5° A la concurrencia de atenuantes.

6° A la concurrencia de agravantes.

En los casos del artículo 34 inciso 1°, 6° y 7° del Código Penal, se hará la separación de cada uno de los elementos, que, con arreglo al mismo, deben concurrir para su procedencia.

Si se resolviera negativamente la primera, segunda y tercera cuestión no se tratarán las demás.

Las cuestiones previstas en los incisos 3°, 4°, 5° y 6° de este artículo, sólo se plantearán cuando hubiesen sido discutidas o el Tribunal las encontrare pertinentes.

Art. 215. La mayoría absoluta de votos formará veredicto.

Art. 216. La apreciación de la prueba se hará conforme al principio de las libres convicciones.

Art. 217. Dictado el veredicto se procederá a leerlo por Secretaría.

Art. 218. No probándose la acusación, se absolverá libremente al acusado.

Queda prohibida la simple absolución de la instancia.

Art. 219. Dentro de los tres días de la lectura del veredicto, el mismo Tribunal dictará la sentencia que corresponda cuando el veredicto hubiere sido condenatorio.

La omisión de esta obligación constituye falta grave.

En las sentencias se plantearán las cuestiones de derecho que considere necesarias el Tribunal, siendo las únicas esenciales las siguientes:

1° La relativa a la calificación legal del delito.

2° La que se refiere al pronunciamiento que corresponda dictar.

3° A requerimiento del querellante o particular damnificado, lo pertinente a las indemnizaciones del daño material y moral causado por el delito, fijándose el monto prudencialmente por el Tribunal en caso necesario.

4° Lo que respecta al pago de las costas.

Art. 220. El Tribunal requerirá las informaciones que crea convenientes para formar criterio, a fin de poder ordenar en la sentencia, cuando lo juzgue pertinente, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena, en los casos en que procede la condenación condicional conforme al artículo 26 del Código Penal.

Art. 221. La condenación condicional se hará saber a la Oficina de Identificaciones y esta dependencia, si el condenado cometiere un nuevo delito durante el tiempo de la suspensión del cumplimiento de la pena, lo comunicará al Tribunal a los efectos determinados en el artículo 27 del Código Penal.



LIBRO CUARTO

RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LOS TRIBUNALES SUPERIORES

TITULO I

Recursos

CAPITULO I

RECURSO DE ACLARACIÓN

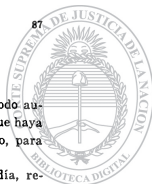
Art. 222. Este recurso se otorgará a las partes al solo efecto de aclarar algún concepto dudoso u obscuro que pueda contener el auto o sentencia que decida algún incidente o termine definitivamente la causa, y deberá interponerse dentro del término de veinticuatro horas y resolverse dentro de dos días.

Podrá también hacerse uso del mismo para que se resuelva sobre algún punto accesorio o secundario a la cuestión principal, y que hubiere sido omitido al decidir sobre esta última.

Art. 223. La interposición de este recurso suspenderá el término que hubiera empezado a correr para la deducción de otros que fueran procedentes.

Art. 224. La decisión que recaiga formará parte integrante del auto o sentencia a que se refiera, en el caso de que aquélla contenga una aclaración o ampliación.

Art. 225. Dentro del plazo de tres días, de oficio, el Juez o Tribunal podrá aclarar o salvar cualquier error u omisión material, produciendo sus resoluciones el mismo efecto que si hubiesen sido provocadas por recurso de las partes.



CAPITULO II

RECURSO DE REPOSICIÓN

Art. 226. El recurso de reposición se acuerda contra todo auto o providencia que contenga alguna decisión expresa y que haya sido dictado dentro de la instancia, sin ponerle término, para que sean revocados por contrario imperio.

Debe interponerse este recurso dentro de tercero día, resolviéndose sin más trámite.

Art. 227. La resolución que recaiga hará ejecutoria para el recurrente, a menos que el recurso fuese acompañado del de apelación en subsidio, o éste se interponga dentro de cuarenta y ocho horas de notificada, y la providencia reclamada reuniese las condiciones establecidas en el artículo 230, para que ella sea apelable.

Art. 228. Este recurso podrá interponerse ante cualquier Juez o Tribunal, y estos mismos podrán reponer sus decisiones de oficio, cuando hallasen que han incurrido en error o tuvieren un grave y justificado motivo para ello.

Art. 229. Los decretos de mero trámite u orden en el proceso no son recurribles, pero los Jueces y Tribunales pueden reponerlos de oficio.

CAPITULO III

RECURSO DE APELACIÓN

Art. 230. El recurso de apelación se otorgará de los autos interlocutorios que decidan algún artículo, de las resoluciones expresamente declaradas apelables y de las demás que causen gravamen irreparable; y procede únicamente en relación.

El término para apelar será el de tres días cuando no se prescriba expresamente un plazo menor.

Art. 231. La apelación podrá deducirse verbalmente, haciéndolo constar por diligencia que asentará al efecto en el expediente el funcionario encargado de la notificación, y también por escrito y podrá fundarse. Al interponer recurso el apelante manifestará si se conforma con la composición del Tribunal de Apelación. Las demás partes harán esta manifestación dentro del tercero día de concedido el recurso.



Art. 232. Al otorgarse el recurso, se mandará remitir de oficio los autos a la Cámara dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación.

En ningún caso la falta de reposición de sellos dará motivo para demorar la remisión de la causa, siempre que se trate de acción pública.

Si se dedujere recurso por alguna persona de las que intervienen sin ser parte directa, como los peritos, testigos, abogados por sus honorarios, etc., se sacará testimonio de lo pertinente, formándose incidente por separado sin elevar la causa principal al Superior, quien, cuando estuviere el incidente en estado de ser resuelto, podrá pedirla *ad effectum videndi* por un término que no exceda de tres días.

CAPITULO IV

RECURSO DE NULIDAD

Art. 233. El recurso de nulidad sólo tiene lugar contra resoluciones pronunciadas con violación de las formas prescriptas en este Código bajo esa penalidad, o por omisión de formas del procedimiento establecido bajo la misma sanción.

Art. 234. Sólo podrá deducirse el recurso de nulidad contra las resoluciones de que puede interponerse apelación, deduciéndose conjuntamente con ésta y en el término y forma para ella prescripto.

Art. 235. Si el procedimiento estuviese arreglado a derecho, y la nulidad proviniese de la forma y contenido de la resolución, la Cámara así lo declarará y dictará la que corresponda.

Si la nulidad proviniese de vicio en el procedimiento, se declarará nulo lo obrado que se relacione con la actuación nula.

Cuando el vicio no fuere de mayor entidad, los subsanará la Cámara y dictará resolución.

En caso contrario devolverá los autos al Juez para que subsane la nulidad y dicte nueva resolución.

La Cámara apercibirá al Juez que incurra en esa clase de nulidades, y en caso de reincidencia pondrá el hecho en conocimiento de la Suprema Corte.

Art. 236. La nulidad por defectos de procedimiento que no sean trámites de carácter esencial, quedará subsanada siem-



pre que no se reclame la reparación de aquéllos en la misma instancia en que se hayan cometido.

Art. 237. Los Jueces y Tribunales podrán declarar de oficio las nulidades que resulten de la violación de trámites esenciales en el procedimiento, o de la infracción de disposiciones expresas de la presente ley que contengan esa sanción.

CAPITULO V

RECURSO DE QUEJA

Art. 238. Podrá interponerse este recurso si el Juez deniega los de apelación o nulidad deducidos, separada o conjuntamente, debiendo acordarlos. Esta queja deberá interponerse dentro de tres días de notificada la denegación.

Art. 239. A este efecto la parte que se sintiere agraviada, podrá ocurrir directamente en queja al Superior, pidiendo que se otorgue el recurso denegado. El Tribunal observará en tal caso el procedimiento establecido en los artículos 247, 248, 249 y 250.

CAPITULO VI

RECURSO DE REVISIÓN

Art. 240. Habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, en los casos siguientes:

1° Si consta de un modo indudable que el delito fué cometido por una sola persona y habiendo sido juzgados por dos o más Jueces, aparecen como reos en las respectivas sentencias ejecutoriadas diversas personas.

2° Si se ha condenado a alguno como autor, coautor o cómplice del homicidio de una persona, cuya existencia se acredite después de la sentencia.

3° Si se ha condenado a alguno por resolución cuyo fundamento haya sido un documento que después se ha declarado falso por sentencia ejecutoriada en causa criminal; o si el condenado hallare o recobrar documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor, o por obra de un tercero.

4° Si, existiendo condena, se ha comprobado posteriormente, en causa criminal, la falsedad de los testimonios o dictámenes periciales que la fundaron.



5° Si una ley posterior ha declarado que no es punible el acto que antes se consideraba como tal, ha disminuído su penalidad o variado la manera de computar la prisión preventiva en forma favorable al acusado.

6° Si se ha procesado a una persona por dos o más delitos separadamente y se ha impuesto penas que deben acumularse o fijarse de acuerdo con los artículos 55, 56, 57 y 58 del Código Penal.

7° Si después de la condena se descubren nuevas pruebas que demuestren evidentemente que el delito no existe, o que el acusado no es autor, coautor o cómplice del mismo.

Art. 241. El recurso de revisión podrá promoverse por el procesado o por su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, y por el representante del Ministerio Fiscal. La muerte del condenado no impide que se deduzca para rehabilitar su memoria o procurar el castigo del verdadero culpable.

Art. 242. Las Cámaras de Apelación conocerán de este recurso oyendo al representante del Ministerio Fiscal, cuando no fuese deducido por éste, quien deberá expedirse en el término de cinco días. Evacuada la vista se llamará autos.

Art. 243. En el caso del inciso 1° del artículo 240 anulará la sentencia y dispondrá que se instruya de nuevo la causa por el Juez a quien corresponda el conocimiento del delito.

En los casos de los incisos 2° y 7° anulará la sentencia y ordenará que se ponga inmediatamente en libertad al condenado.

En los casos de los incisos 3° y 4°, anulará también la sentencia y resolverá que se instruya de nuevo la causa por el Juez competente.

En el caso del inciso 5°, decidirá que se ponga en libertad al condenado, o que se le disminuya la pena, según corresponda.

En el caso del inciso 6°, se dictará un solo fallo, comprendiendo los delitos ya juzgados, cuyos hechos y calificación se tendrán por irrevocablemente fijados.

Art. 244. El Tribunal podrá, para mejor proveer, decretar las diligencias que juzgue necesarias.

Art. 245. Para que sea admisible el recurso, deberá acompañarse, cuando se deduzca, testimonio de la sentencia y los documentos y pruebas correspondientes; en caso contrario, será desechado de plano.

TITULO II

Modo de proceder en segunda instancia

Art. 246. Elevada la causa a la Cámara, si las partes hubiesen manifestado en la oportunidad del artículo 231 que se conforman con la composición del Tribunal, o si no hubiesen hecho manifestación alguna, los autos entrarán al acuerdo con nota del Secretario y sin más trámite.

Art. 247. Cuando se interpusiere recurso de queja, el Tribunal ordenará al Juez que informe en un breve término, que al efecto se le señalará. No será permitido al Juez enviar los autos como mejor informe.

Art. 248. Recibido el informe, el Tribunal, si lo considerase necesario, podrá ordenar, para mejor proveer, que le sea remitido el proceso.

Art. 249. El Tribunal pronunciará resolución dentro de cinco días, contados desde que se recibiere el informe o se pusiere el proceso a su disposición.

Art. 250. Si el Tribunal desechara la queja mandará devolver la causa sin más trámite al Juzgado de su procedencia.

Si hiciere lugar, declarará mal denegado los recursos de apelación o nulidad interpuestos conjunta o separadamente y los acordará, comunicándolo al Juez de la causa; procediéndose después como lo prescribe el artículo 246.

TITULO III

Recurso de casación para ante la Suprema Corte de Justicia

Art. 251. El recurso de casación procede:

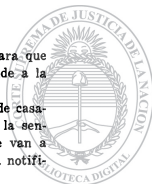
1º Si la sentencia se ha dictado con violación del artículo 178 de la Constitución de la Provincia.

2º Si la sentencia ha omitido o violado la ley o doctrina, o ha aplicado falsa o erróneamente la ley o doctrina.

3º Si se han violado durante el juicio oral las reglas de los artículos 206, 207, 212 y 213.

4º Si se ha discutido por parte interesada, la constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estuyan sobre materia regida por la Constitución citada y la sentencia definitiva es contraria a las pretensiones del recurrente.





Art. 252. El recurso debe interponerse ante la Cámara que haya dictado la sentencia y su conocimiento corresponde a la Suprema Corte de Justicia.

Art. 253. El plazo para la interposición del recurso de casación es de diez días contados desde la notificación de la sentencia. Sin embargo, si las partes no manifiestan que van a deducir recurso a la Corte dentro de los tres días de la notificación de la sentencia, ésta quedará consentida.

Art. 254. El escrito en que el recurso se deduzca contendrá en términos claros y concretos las citas de la ley; y a falta de ésta, los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva y en defecto de éstos, los principios generales del derecho mal aplicados.

Art. 255. Interpuesto el recurso la Cámara examinará sin más trámite:

1° Si la sentencia ha recaído sobre definitiva y el recurso se interpone dentro del término.

2° Si el recurso es procedente con arreglo a este Código.

3° Si el recurrente designa domicilio en la ciudad de La Plata, cuando se trate de causas que hayan tramitado en las Cámaras de los Departamentos de campaña.

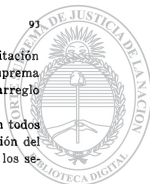
En seguida dictará resolución admitiendo o negando el recurso.

Contra el auto denegatorio podrá interponerse recurso de hecho, dentro de tres días, ante la Suprema Corte.

Art. 256. Se entiende por sentencia definitiva, a los efectos de la procedencia del recurso, la que, aunque haya recaído sobre un artículo, termina la causa y hace imposible su continuación y la que resuelva sobre falta de jurisdicción, cosa juzgada, amnistía o indulto, prescripción y exención de pena en los casos del artículo 132 del Código Penal.

No reviste el carácter de sentencia definitiva aquella en que se concede o niega el sobreseimiento.

Art. 257. El apelante no puede recurrir a la Suprema Corte, de los puntos que le hayan sido resueltos favorablemente, o en el caso de que la cuestión a que se refiere el recurso, aún en el supuesto de ser fallada favorablemente para el que la deduce, o modificaría la solución que se le haya dado por el inferior. La sentencia de la Corte no puede perjudicar a los que intervienen sin ser apelantes o apelados.



Art. 258. El procedimiento a observarse para la tramitación del recurso de casación, una vez elevados los autos a la Suprema Corte, lo determinará el reglamento que ella se dé con arreglo a la Constitución de la Provincia y a este Código.

En la Suprema Corte se oírán al Procurador General en todos los casos en que haya sido parte el Fiscal en la tramitación del juicio; y la sentencia se dictará por la misma, dentro de los sesenta días del llamamiento de autos.

Art. 260. Dentro del término de tres días, contados desde la notificación de la providencia de autos, cada parte podrá presentar una memoria sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la ley o doctrina en el caso *sub judice*.

Art. 261. Si la Suprema Corte estimare que la sentencia de la Cámara ha omitido o aplicado mal la ley o doctrina, deberá declararlo así y dictar resolución con arreglo al texto expreso de la ley; y a falta de ésta, a los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva y, en defecto de éstos, a los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

En el caso previsto en el artículo 251, inciso 3º, la Corte anulará lo actuado en el juicio oral y remitirá a otra Cámara el expediente, para que sea substanciado y fallado.

Art. 262. Si la Suprema Corte entendiera que se ha violado el artículo 178 de la Constitución de la Provincia, procederá como se dispone en la primera parte del artículo anterior.

Art. 263. La sentencia se redactará de completa conformidad al voto de la mayoría, y se transcribirá en el libro de acuerdos y sentencias, precedida de la inserción íntegra del acuerdo e igual cosa se hará en los autos.

Art. 264. La sentencia sólo decide en el caso controvertido. No corresponde al Poder Judicial hacer declaraciones en los fallos.

TÍTULO IV

Ejecución de la sentencia

Art. 265. La ejecución de la sentencia corresponde a la Cámara que hubiese conocido en única instancia.

Art. 266. Si la Cámara no pudiera practicar por sí, directamente, todas las diligencias necesarias, encargará la ejecución

de las que deben practicarse fuera del asiento del Tribunal a los Jueces de Paz y a la Policía.

Art. 267. En los casos del artículo 10 del Código Penal, se impartirán las órdenes necesarias para que se establezca la debida vigilancia durante el tiempo de la condena, a fin de asegurar su efectivo cumplimiento.

Art. 268. Las penas de reclusión y prisión se harán saber a las autoridades encargadas de la dirección del establecimiento en que deben cumplirse esas condenas, con inclusión de un testimonio de la parte dispositiva de la sentencia, a los efectos determinados respecto de cada una de ellas en el Código Penal.

Art. 269. Si la pena fuese de inhabilitación absoluta deberá publicarse la sentencia en el Boletín Oficial.

Si el procesado estuviere ejerciendo un empleo o cargo público, aunque proceda de elección popular, se comunicará al cuerpo, autoridad o jefe respectivo, y a la Junta Electoral Nacional y Provincial.

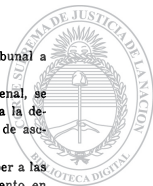
Art. 270. Si la inhabilitación fuese especial, se hará sólo la comunicación de que habla el artículo anterior al cuerpo, autoridad o jefe respectivo haciéndose presente que el condenado ha quedado privado del empleo que desempeñaba e incapacitado para obtener otros empleos del mismo género, dentro del tiempo de la condena.

Art. 271. La condenación al pago de multa o de cantidades pecuniarias, reparación de daños, indemnizaciones de perjuicios y satisfacción de costas, se hará efectiva según las reglas establecidas por las leyes de procedimiento civil para la ejecución de las sentencias. Si no ha recaído condenación al pago de las costas, no procede ante el fuero criminal, la ejecución por los honorarios regulados en la causa.

Art. 272. Para hacer efectiva la pena de multa se procederá conforme al artículo 21 del Código Penal.

El importe de las multas se depositará en el Banco de la Provincia a la orden del Tribunal que hubiere decretado el cumplimiento de la sentencia y como perteneciente a las causas en que se hubieren impuesto, ordenándose oportunamente su transferencia a la cuenta de la Dirección General de Escuelas.

Art. 273. La prisión preventiva se computará de acuerdo con los artículos 3 y 24 del Código Penal.





TITULO V

Libertad condicional

Art. 274. En los casos previstos en el artículo 13 del Código Penal, el condenado podrá dirigir su petición por intermedio de la Dirección del establecimiento donde se halle alojado.

Art. 275. La libertad condicional deberá solicitarse al Tribunal que dictó sentencia en juicio oral y única instancia o a la Cámara del Departamento Judicial donde tramitó la causa, si la condena hubiera sido impuesta de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimientos anterior.

Art. 276. Formulado el pedido, el Tribunal dentro de las cuarenta y ocho horas, recabará informe de la Dirección del establecimiento donde el peticionante cumple su condena, que deberá ser expedido y elevado dentro de igual término, sobre los siguientes puntos:

1° Si el condenado ha observado con regularidad los reglamentos carcelarios.

2° La clase de trabajo a que se ha dedicado y las aptitudes adquiridas o perfeccionadas en el mismo.

Art. 277. Recibido el informe en el Tribunal, éste acordará o denegará la libertad condicional en el término de tres días.

Si fuera concedida, se impartirán las órdenes necesarias para su cumplimiento, sometiéndose al condenado al cuidado del Patronato de Liberados.

Art. 278. Si el establecimiento penal estuviere en el lugar del asiento del Tribunal, se cometerá al secretario la diligencia de imponer al condenado de las condiciones en que se le concede la libertad condicional.

Si se hallare fuera del asiento del Tribunal, se comisionará la diligencia al Director del establecimiento.

LIBRO QUINTO
INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
SECCIÓN I.
INCIDENTES
TÍTULO I
Sobreseimiento



Art. 279. En cualquier estado del sumario, de oficio o a pedido del procesado o su defensor, podrá decretarse el sobreseimiento.

Será definitivo:

1° Cuando resultare con evidencia que el delito no se ha perpetrado.

2° Si el hecho no constituye delito.

3° Si aparece indudable la irresponsabilidad del acusado.

Art. 280. Será provisional:

1° Si no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa.

2° Si se ha comprobado el hecho criminal, pero no aparecen indicios bastantes para determinar a sus autores, coautores o cómplices.

3° Si no apareciere justificada la responsabilidad criminal del procesado.

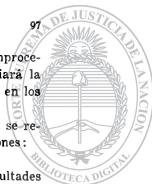
4° Si se hiciere lugar a una cuestión prejudicial perfecta.

Art. 281. El sobreseimiento definitivo es irrevocable, dejando cerrado el juicio en los dos primeros casos del artículo 279, de una manera absoluta y en el tercero respecto del procesado a cuyo favor se decretase.

El sobreseimiento provisional, mientras no se haya convertido en definitivo, deja el juicio abierto hasta la aparición de nuevos datos o comprobantes. Se convertirá en definitivo cuando hubiese transcurrido el tiempo necesario para la prescripción de la acción penal.

Art. 282. Al sobreseer definitivamente, el Juez hará la declaración de que la formación del sumario no influye en el concepto que gozaba el procesado.

Art. 283. El auto que ordene o deniegue el sobreseimiento será apelable dentro del término de tres días. En el primer caso el acusado será puesto en libertad provisional.



Art. 284. Para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del sobreseimiento, el Juez de Instrucción apreciará la prueba del sumario de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos siguientes.

Art. 285. Para que la confesión produzca plena prueba se requiere que medien conjuntamente las siguientes condiciones:

1° Que sea hecha ante Juez competente.

2° Que el que la haga goce del perfecto uso de sus facultades mentales.

3° Que no medie violencia, intimidación, dádiva o promesa.

4° Que no se preste por error evidente.

5° Que el hecho confesado sea posible y verosímil atendiendo las circunstancias y condiciones personales del acusado.

6° Que recaiga sobre hechos que él mismo conozca por la evidencia de los sentidos y no por inducciones.

7° Que el cuerpo del delito esté legalmente comprobado y la confesión concuerde con sus circunstancias y accidentes.

Art. 286. La confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante.

Los distintos hechos y circunstancias que ella contenga no importan excepciones cuya prueba incumba al imputado, salvo cuando por la calidad de las personas, sus antecedentes u otras circunstancias del hecho, resulten presunciones graves en su contra.

Art. 287. La confesión puede retractarse durante el sumario, probándose haberse producido por violencias, amenazas, dádivas o promesas, o que tuvo por causa un error evidente o que el delito confesado es físicamente imposible.

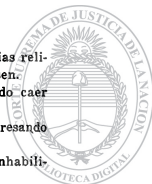
Art. 288. El incidente que se promueva sobre retractación de la confesión se substanciará en pieza separada, continuándose el sumario si no estuviera terminado.

El término de prueba será de cinco días.

Art. 289. La fuerza probatoria de las declaraciones de testigos será apreciada según las disposiciones de este Código y las reglas de la sana crítica.

Art. 290. Las declaraciones de dos testigos hábiles, contestes en el hecho, lugar, tiempo y demás circunstancias principales, podrán ser invocadas por el Juez como plena prueba de lo que afirmaren.

Art. 291. Para que merezca entera fe el dicho de los testigos, han de mediar las condiciones y circunstancias siguientes:



1° Que hayan prestado juramento, según sus creencias religiosas o prometido decir verdad cuando no las tuviesen.

2° Que los hechos sobre que declaren, hayan podido caer directamente bajo la acción de sus sentidos.

3° Que den la razón satisfactoria de sus dichos, expresando por qué y de qué manera saben lo que han declarado.

4° Que no se encuentren afectados por tachas o inhabilidades legales, justificadas en forma.

Art. 292. La inhabilidad de los testigos será apreciada al pronunciarse el Juez respecto del sobreseimiento, a cuyo efecto los mismos podrán ser tachados cuando concurren cualesquiera de las circunstancias previstas en el artículo 141; debiendo alegarse las tachas en el escrito en que se pida el sobreseimiento, ofreciéndose la prueba pertinente, y probarse dentro de tercero día, salvo que resulten manifiestas de las propias declaraciones del testigo.

Art. 293. La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de sus conclusiones con las leyes de la sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que el proceso ofrezca.

Art. 294. Los instrumentos públicos harán prueba plena en los mismos casos que en derecho civil.

Art. 295. Los medios de prueba establecidos en materia civil para la comprobación de los documentos privados, rigen también en lo criminal en cuanto no estén limitados o en oposición con lo que se determina en este Código.

Art. 296. Para que haya plena prueba por presunciones o indicios, es preciso que éstos reunan las condiciones siguientes:

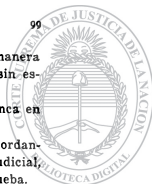
1° Que el cuerpo del delito conste por medio de pruebas directas e inmediatas.

2° Que los indicios o presunciones sean dos por lo menos, salvo que se trate de impresiones digitales, las que pueden invocarse como plena prueba.

3° Que se relacione con el hecho primordial que debe servir de punto de partida para la conclusión que se busca.

4° Que no sean equívocos, es decir, que todos reunidos no puedan conducir a conclusiones diversas.

5° Que sean directos, de manera que conduzcan lógica y naturalmente al hecho de que se trata.



6° Que sean concordantes los unos con los otros, de manera que tengan íntima conexión entre sí y se relacionen sin esfuerzo, desde el punto de partida hasta el fin buscado.

7° Que se funden en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones o indicios.

La declaración de un testigo hábil directo o las concordantes de dos testigos inhábiles y la confesión extrajudicial, pueden servir para completar otros elementos de prueba.

TITULO II

Excarcelación y eximición bajo fianza o caución

Art. 297. La excarcelación y la eximición bajo fianza o caución, proceden en las condiciones establecidas por el artículo 19 de la Constitución de la Provincia y se rigen por las mismas reglas en todo lo que sea compatible.

Art. 298. Si se hubiese declarado en la oportunidad que determina este Código la procedencia de la excarcelación bajo fianza, a pedido del procesado o de su defensor, se acordará ésta en la forma que se determina en los artículos siguientes. La petición podrá formularse al Juez aun antes de aquella declaración y la resolución deberá dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas.

Art. 299. La caución podrá ser real o personal y sólo garante la comparecencia del reo durante el proceso y en su caso el cumplimiento de la pena.

Art. 300. Puede ser fiador toda persona que teniendo capacidad legal para contratar, sea de responsabilidad a juicio del Juez; pudiendo éste, si no conociere al fiador propuesto, exigir que se justifique su responsabilidad por información sumaria de dos testigos ante el Secretario, o por cualquier otro medio.

Art. 301. El auto que decrete o deniegue la libertad bajo caución, será reformable de oficio o a instancia de parte durante todo el curso de la causa. Si la libertad provisional hubiese sido concedida o denegada por el Superior, el Juez no podrá usar de tal facultad si no se hubiere modificado la situación del acusado. El término para apelar será de veinticuatro horas.



Art. 302. Las cauciones para acordar la libertad bajo fianza podrán otorgarse a *pud acta*. En el caso de gravamen hipotecario, se ordenará también la inscripción en el registro correspondiente.

Art. 303. El procesado y el fiador deberán en el mismo acto de prestar caución, fijar domicilio en el lugar donde tenga asiento el Juzgado. Deberá asimismo el procesado elegir residencia de la que no podrá ausentarse sin permiso del Juez. Las notificaciones y citaciones que se hagan al acusado o a su defensor, deben ser hechas también al fiador, cuando se relacionen con la obligación de éste.

Art. 304. Si el encausado no compareciere al llamado del Juez, se decretará inmediatamente orden de prisión contra él y se fijará un término al fiador para que lo presente, bajo apercibimiento de hacerse efectiva la garantía.

Si el fiador no presentare al procesado en el término que fije el Juez, se hará efectivo el apercibimiento. El término para apelar será de veinticuatro horas.

Art. 305. Si el encausado compareciere, fuere presentado por el fiador o se le aprehendiese antes de hacerse efectiva la garantía, quedará revocado el auto que ordenó su efectividad, siendo las costas a cargo del fiador.

Art. 306. Para hacer efectiva la obligación del fiador se procederá ejecutivamente, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

Los efectos públicos se enajenarán por corredores de Bolsa o en su defecto por agentes comerciales.

Art. 307. El importe de la fianza, deducidos los gastos y costas, ingresará al fondo de la Dirección General de Escuelas.

Art. 308. Para la ejecución de la fianza se dará intervención a la Dirección General de Escuelas por intermedio de su representante letrado.

Art. 309. En cualquier estado del juicio puede substituirse, a petición del encausado o su defensor, una fianza por otra.

Art. 310. Se cancelará la fianza:

1° Si el fiador lo pidiere, presentando a la vez al procesado o si éste hubiere sido detenido a su solicitud.

2° Si fuere constituido en prisión, revocándose el auto de libertad provisional. Se revocará el auto de libertad provisional si el procesado cometiere un nuevo delito o cuando la causa deje de ser excarcelable.



3° Si se dictare auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria o cuando, siendo condenatoria, se presentare el reo para cumplir la condena.

4° Por muerte o por locura incurable del procesado, estando pendiente la causa.

El término para apelar será de veinticuatro horas.

Art. 311. Si por cualquier causa cesare el defensor del excarcelado, se le hará saber a éste y el Juez o Tribunal lo substituirá inmediatamente por el Defensor de Pobres, o en su defecto por otro letrado que se designe de oficio, quienes desempeñarán sus funciones mientras el procesado no nombre otro defensor.

Art. 312. Si el fiador falleciere, se volviere loco o ausentare definitivamente de la Provincia, siendo la fianza personal, se decretará inmediatamente la detención del procesado hasta que presente otro fiador.

Art. 313. La eximición de prisión puede solicitarse directamente por el interesado o por un tercero a su nombre.

TITULO III

Locura, fuga, rebeldía y muerte del procesado

Art. 314. La locura o fuga del procesado, sobrevenida en sumario, no paraliza la investigación judicial, salvo respecto de la indagatoria, pero suspende el juicio oral.

Art. 315. En caso de locura, el Juez o la Cámara, en su caso, enviará al presunto insano al Hospital Melchor Romero para que su Director informe al respecto. Esto sin perjuicio de los peritos que a su costa puedan proponer las partes.

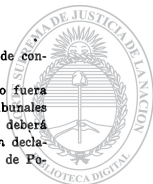
Art. 316. El Juez y la Cámara para declarar la locura del procesado procederán como se determina por el artículo 141 y siguientes del Código Civil.

Art. 317. Cesando la incapacidad mental, el Juez o Tribunal así lo declarará, previos los trámites establecidos en los artículos precedentes, y la causa seguirá su curso.

Art. 318. Será declarado rebelde:

1° El procesado que no compareciere a la citación judicial.

2° El que fugare del establecimiento donde se hallare preso o se ausentare sin licencia del Juez, del lugar que se le hubiere fijado para su residencia.



3° El que hallándose en libertad provisional dejare de concurrir a la citación judicial sin causa justificada.

Art. 319. La citación se hará por cédula cuando esto fuera posible, y en carteles que se fijarán en la casa de los Tribunales durante el término de tres días, dentro de los cuales deberá comparecer. Si no lo hace, el Juez o Tribunal dictará la declaración de rebeldía, ordenando su captura a la Jefatura de Policía.

Art. 320. En caso de fuga, la rebeldía se declarará por la autoridad judicial, una vez recibida la noticia del Jefe o Alcalde del establecimiento o lugar en que se hubiere hallado detenido el procesado o bajo cuya guarda se encontraba.

Art. 321. Terminado el sumario, en caso de locura o fuga del acusado, se guardarán los autos y las piezas de convicción que no fueran de un tercero irresponsable y aunque lo fuesen, cuando el Juez creyere que es indispensable su conservación, en cuyo caso se acordará al tercero la indemnización correspondiente. Si el procesado se presentare o fuere habido, la causa seguirá su curso.

Art. 322. Si la rebeldía fuere declarada hallándose la causa en la Cámara para juicio oral, se suspenderá su curso hasta la presentación o aprehensión del procesado, observándose lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 323. Si fuesen dos o más los procesados y no a todos se les pudiese declarar en rebeldía, se suspenderá el curso de la causa respecto de los rebeldes, y se continuará respecto de los demás. El mismo procedimiento se seguirá en caso de locura de uno o varios de los procesados.

Art. 324. Si se produce la muerte del procesado, el Juez o Tribunal ordenará el archivo de la causa, quedando como inexistente toda sentencia condenatoria que no estuviese firme.

SECCIÓN II PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TÍTULO I

Modo de proceder en caso de detención, arresto o prisión ilegal de las personas

Art. 325. Contra toda orden o procedimiento que tienda a restringir sin derecho la libertad de una persona, procede el recurso de *habeas corpus*.



Se considerará ilegal a los efectos de este artículo:

1° Toda orden de prisión o detención que no se dicte de acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Constitución Provincial.

2° La que no emane de autoridad competente para ordenar detenciones.

3° La detención preventiva que se prolongue más allá del límite fijado por el artículo 174 de este Código.

4° La detención preventiva por faltas penadas con multa.

5° La detención de una persona a quien no se le ha notificado la causa por la cual se le priva de la libertad dentro de veinticuatro horas.

6° Cualquier otro caso análogo de restricción ilegal de la libertad de una persona.

Art. 326. En el caso del inciso 5° del artículo anterior, conocerá del recurso cualquiera de los Jueces letrados de la Provincia. En los demás casos entenderá el Juez letrado que ejerza jurisdicción en el lugar donde el hecho hubiera ocurrido. Si hubiere varios, podrá conocer cualquiera de ellos a elección del recurrente. Si la restricción a la libertad se comete por un Juez de Instrucción entenderá del recurso el Tribunal superior en grado. Si se comete por la Cámara o por el Presidente del Tribunal, conocerá la Suprema Corte.

Art. 327. El Juez que conozca del recurso, solicitará inmediatamente del funcionario autor de la orden de detención o restricción, le informe sobre los motivos de que ésta proceda, para resolver en su vista; fijándole un plazo que no exceda de doce horas, salvo el caso del artículo 331, dentro del cual deberá contestarla el funcionario o persona a quien se dirija.

El auto de *habeas corpus* debe ser obedecido inmediatamente, siempre que de sus términos conste claramente cuál es el funcionario autor de la orden de detención y cuál la persona objeto de dicha orden.

Art. 328. La petición de *habeas corpus* debe ser deducida por escrito o telegráficamente por la misma persona detenida o por otra a su nombre.

Art. 329. La orden de *habeas corpus* se notificará al funcionario a quien se dirige o a aquel bajo la guarda o autoridad de quien se encuentre el individuo en cuyo favor ha sido expedida.



Si el funcionario autor de la orden de detención residiese fuera del lugar donde tiene su asiento el Juez que conoce del recurso, el informe podrá requerirse por telegrama recomendado, sirviendo de notificación del auto de *habeas corpus* el aviso de la comunicación.

Art. 330. Si el detentador rehusa recibirla, se le informará verbalmente su contenido; si se oculta o impide la entrega a la persona encargada de la ejecución, la orden deberá ser fijada exteriormente en un lugar aparente de su morada o de aquella en que la persona detenida se encuentre, por ante dos testigos si pudieran obtenerse.

Art. 331. Si el funcionario o corporación autor de la orden de detención fuere de aquellos que tienen por razón de su cargo facultad para expedir tales órdenes, el Juez o Tribunal se limitará a pedir inmediatamente el informe del caso, fijando un plazo prudencial para expedirla, y en su vista procederá a resolver el recurso.

Art. 332. En los demás casos, el funcionario o persona autor de la detención o restricción, devolverá la orden de *habeas corpus*, presentando la persona en ella designada si así se le ordenase y se encontrare bajo su guarda y autoridad, y escribiendo al dorso, o agregando por separado, un informe en que claramente se exprese:

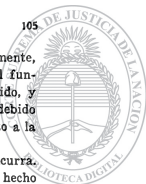
1° Si tiene o no en custodia, detenido, preso o restringido al individuo sobre el cual se le ordena informar.

2° La autoridad con que se le impone tal detención, prisión o restricción y el fundamento de ella, expresándolo claramente.

3° Si ha tenido en su poder, o custodia, o restringido al individuo requerido, en cualquier tiempo, y si ha transferido dicha custodia a otro.

Si la parte está detenida en virtud de auto, orden o mandamiento escrito, debe agregarse original o en copia al informe.

Art. 333. Si el funcionario o persona a quien se ha dirigido y notificado debidamente un auto de *habeas corpus*, rehusare o descuidare cumplirlo, no presentando la persona nombrada en él, cuando así se le hubiese ordenado, y no informa plena y explícitamente al devolverlo sobre los puntos a que tal informe debe contraerse, dentro del tiempo requerido sin alegar excusa suficiente para dicha desobediencia o descuido, el Presidente del Tribunal o Juez a quien debiera devolverse, desde que se



justifique que el auto fué dirigido y notificado debidamente, dirigirá orden para que se aprehenda inmediatamente al funcionario o persona culpable de la desobediencia o descuido, y sea detenido hasta que se devuelva el auto con el informe debido y obedezca a las órdenes que se le hayan dado con respecto a la persona para cuyo socorro se expidió el auto.

Esto sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra.

Si el funcionario desobediente fuere un Juez letrado, el hecho constituirá falta grave a los efectos del juicio político o de responsabilidad, y el Superior ordenará el cumplimiento del auto de *habeas corpus* directamente o por intermedio de quien corresponda.

Art. 334. Producido el informe, se procederá a examinar los hechos contenidos en él y la causa de la detención, prisión o restricción, para averiguar si son o no legales, resolviéndose el incidente dentro de veinticuatro horas.

Si se hiciere lugar al recurso, se ordenará directamente la libertad del acusado, en los casos de los incisos 1°, 2°, 3° y 4°, del artículo 325.

En el caso del inciso 5° el Juez o Tribunal, si lo encuentra pertinente, podrá mandar hacer saber la causa de la detención del acusado. En los casos del inciso 6° se aplicarán, en lo pertinente, las reglas que anteceden.

El Juez o Tribunal que conozca del recurso de «*habeas corpus*», puede solicitar la remisión de los autos y resolver con ellos a la vista.

Art. 335. El Juez acordará un breve término para la prueba, si la persona que ha deducido el auto de «*habeas corpus*» negare los hechos afirmados en el informe.

Art. 336. La sentencia será apelable si fuere dictada por un Juez, y conocerá del recurso el Superior respectivo, o el Tribunal de que forme parte el Juez que conoció del mismo. Si se ordenare la libertad, la apelación solo se concederá en el efecto devolutivo, debiendo interponerse el recurso dentro del término de veinticuatro horas.

Las resoluciones dictadas por la Cámara y la Corte en el recurso de «*habeas corpus*» son inapelables.

Art. 337. El procedimiento a que dé lugar el recurso de «*habeas corpus*» será sumarísimo. No se correrá vista al Fiscal, bastando que sea notificado de las resoluciones que se dicten para ponerlo en condiciones de deducir los recursos legales.



En esta clase de juicios, no procede ninguna recusación. El magistrado que se considere inhibido así lo declarará.

Art. 338. Las costas del recurso, en caso de ser negado, serán a cargo del peticionante; y siendo otorgado, a cargo del funcionario o persona autor de la detención ilegal.

Art. 339. Si el Juez o Tribunal revocase la orden de detención o prisión ordenará, si procediese, que pasen los antecedentes al Ministerio Público y éste estará obligado a deducir querella contra el autor del abuso, dentro del término de diez días a fin de hacer efectiva su responsabilidad.

En uno y otro caso el funcionario culpable deberá indemnizar los perjuicios que haya ocasionado.

Lo dispuesto en este artículo es aplicable a los demás casos de «habeas corpus», en que la restricción de la libertad provenga de un abuso, negligencia o desconocimiento del derecho del autor de la misma.

Art. 340. El representante del Ministerio Público que no dedujere la querella en el plazo indicado en el artículo anterior, incurrirá en una multa de quinientos pesos y en suspensión del cargo por sesenta días.

TITULO II

Juicio de calumnia e injurias

Art. 341. En esta clase de juicios se observarán, en lo pertinente, las reglas establecidas para la substanciación de las causas por el procedimiento oral en única instancia y además las que se determinan a continuación.

Art. 342. La acción por calumnia e injurias podrá ser ejercitada solo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

El escrito de querella se presentará con la publicación acusada, en su caso, y se indicará en el mismo toda la prueba que se intente producir. Si entre ésta existiera la de testigos, se acompañará su nómina, expresando el nombre, profesión y domicilio y los interrogatorios a cuyo tenor serán examinados.

La presentación de la querella se hará saber al querellado para que dentro del término perentorio de diez días ofrezca la prueba de descargo, sin que le sea permitido refutar o contestar la querella, debiendo limitarse al objeto expresado. Si infringiera esta



regla, el escrito le será devuelto y se le dará por decaído el derecho de proponer pruebas.

Art. 343. No es aplicable en estos juicios lo dispuesto en el artículo 203, inciso 3°. La concurrencia de los testigos, peritos y demás personas que se manda comparecer a pedido de las partes, es a costa de éstas.

Art. 344. El Agente Fiscal no es parte en estos juicios.

Art. 345. Iniciada la audiencia el Presidente ordenará la lectura por Secretaría del escrito de querella y se procederá en lo demás como lo disponen los artículos 206, 207, 208, 212 y 213 en lo pertinente.

Art. 346. Antes de recibirse la prueba, si mediara solicitud del querellado en ese sentido, el Presidente invitará al querellante a una reconciliación. Si las partes se reconciliaran, terminará la causa, siendo las costas a cargo del querellado.

Art. 347. Si el querellado no compareciere a la audiencia designada se le nombrará defensor, que será el de Pobres, con quien se entenderán las ulteriores del juicio. Al efecto, el Defensor de Pobres a quien le corresponda intervenir, deberá hallarse presente al iniciarse la audiencia, citándosele con la suficiente anticipación.

Si no concurriere el querellante se le dará por desistido de la querella, con costas.

Art. 348. El querellado antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo, puede retractarse públicamente, siendo a su cargo las costas.

Producida la retractación, el Tribunal dará por terminada la audiencia y ordenará el archivo de la causa, previo pago de las costas.

Art. 349. Cuando la injuria o la calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, el Tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

TITULO III

Procedimiento en los juicios sobre faltas

Art. 350. El procedimiento ante el Jefe de Policía, Comisarios de la misma, Intendentes Municipales u otras autoridades administrativas, por infracciones que no constituyan delitos, se ajustará a las siguientes reglas:



1° Se labrará un acta donde se haga constar quién es el autor de la infracción, el nombre, profesión y domicilio de los testigos que la justifiquen y la fecha en que ella ha sido cometida, no requiriéndose consignar las declaraciones u otras pruebas in extenso, ni ser firmada por los testigos.

2° Se notificará al infractor inmediatamente, haciéndole saber por escrito la falta que se le imputa, a fin de que pueda alegar y probar lo que estime conveniente.

3° Oídas las pruebas y descargos del infractor, se declarará cuál es la pena que corresponde a éste, con citación de la disposición legal aplicable al caso.

Art. 351. El infractor podrá apelar de esa declaración en el acto de la notificación o dentro de veinticuatro horas, y si no lo hiciere, se procederá a hacer efectiva la pena. También podrá recurrir, dentro del término fijado, directamente ante el Tribunal que debe conocer de la apelación, en cuyo caso se observará, en todo lo pertinente, el procedimiento establecido en el artículo siguiente.

Si en el primero de los casos se le degenare la apelación, podrá interponer dentro de las cuarenta y ocho horas, recurso de queja ante el Tribunal competente, que lo es la Cámara de Apelación en lo Criminal de cada Departamento Judicial, si bien en la substanciación y decisión, tanto del recurso de queja cuanto del de apelación, intervendrá uno solo de sus miembros designado en cada caso y por riguroso turno por el Presidente del Tribunal, en quien recaerán también las designaciones.

Art. 352. Deducida la queja, el Juez del Tribunal a quien corresponda intervenir, recabará las actuaciones producidas, que deberán serle elevadas dentro de las veinticuatro horas; y a su vista, acordará la apelación o declarará injustificada la queja.

Art. 353. Otorgado el recurso conforme al artículo anterior o concedido por la autoridad policial, municipal o administrativa y recibidos en este caso los antecedentes, se citará a una audiencia al apelante y al funcionario o empleado que labró el acta a que se refiere el artículo 350, inciso 1°, la que se celebrará dentro de las cuarenta y ocho horas.

Oídos brevemente los comparecientes, se dictará la resolución definitiva.

Si no concurriera el apelante, sin justa causa, se le dará por desistido del recurso.



Art. 354. El Juez del recurso podrá, para mejor proveer, recabar alguna información que juzgue indispensable, en cuyo caso se diferirá la resolución del asunto por un plazo que no exceda de tres días.

TITULO IV

Procedimiento relativo a menores

Art. 355. Los Jueces de Instrucción y las Cámaras de Apelación cuando intervienen en juicio oral y única instancia, ante quienes comparezca un menor de diez y ocho años acusado de un delito o como víctima de un delito, podrán disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material o moralmente abandonado o en peligro moral, entregándolo a una persona honesta, pariente o no, o a un establecimiento de beneficencia privado o público, o a un reformatorio público de menores.

A ese efecto no regirán las disposiciones legales sobre prisión preventiva, la que sólo será decretada cuando el Juez lo juzgue necesario y se cumplirá dónde y cómo el mismo lo indique. Podrán también dejarlo a sus padres, tutores o guardadores bajo la vigilancia del Juez o Tribunal.

La resolución del Juez será susceptible de los recursos de revocación y apelación en las mismas condiciones prescriptas en el artículo 359.

Art. 356. Los mismos Jueces y Cámaras cuando sobresean provisoria o definitivamente respecto a un menor de diez y ocho años o cuando lo absuelvan, o cuando resuelvan definitivamente en un proceso en que un menor de diez y ocho años haya sido víctima de un delito, podrán disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los veintiún años, si se hallare material o moralmente abandonado, o en peligro moral y en la misma forma establecida en el artículo 355.

Art. 357. Todo menor de que hayan dispuesto los Jueces y Tribunales indicados en los artículos precedentes, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria.

Art. 358. Los mismos Jueces y Tribunales en los procesos a que se refiere el artículo 355, podrán imponer en cada caso a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su cargo y que no importen delitos del derecho



penal, multas hasta la suma de doscientos pesos o arresto hasta un mes o ambas penas a la vez.

Estas condenas podrán suspenderse si los culpables dieran seguridades de reforma, quedando prescriptas en el plazo de dos años si no incurrieren en hechos de la misma naturaleza.

Art. 359. Los padres o tutores de los menores de quienes hayan dispuesto definitivamente los Jueces de Instrucción o Tribunales, o que hayan sido condenados en virtud del artículo anterior, podrán solicitar revocatoria de esas resoluciones dentro de cinco días de la notificación de las mismas. Esta oposición se substanciará en una audiencia verbal, con las pruebas que ordene el Juez o indique el recurrente, si el Juez lo juzgare pertinente.

La resolución del Juez será apelable dentro del término de cuarenta y ocho horas.

Art. 360. La Suprema Corte de Justicia reglamentará la forma de cooperación policial en los sumarios e informaciones respectivas, la cooperación de los particulares o establecimientos particulares o públicos que se avengan a coadyuvar gratuitamente en la investigación y en la dirección y educación de los menores, así como también la forma de la vigilancia que corresponde a los Jueces en virtud de lo dispuesto en los artículos 355 y 357 de este Código y 17 de la Ley Nacional 10903.

Art. 361. A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por abandono material o moral, o peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores, a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido diez y ocho años de edad vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres, guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.

Art. 362. Si la aplicación de las disposiciones precedentes obstare a la marcha regular del juicio, se formará incidente por separado.

Art. 363. Tratándose de menores procesados la audiencia para el juicio oral no será pública.



TÍTULO FINAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 364. Los instrumentos del delito y los efectos provenientes del mismo serán decomisados, a no ser que pertenecieran a terceros no responsables.

Art. 365. Los instrumentos decomisados, una vez terminada definitivamente la causa, deberán ser destruidos. También lo serán los pertenecientes a terceros no responsables que no los reclamasen dentro del año de la conclusión del proceso. A esc fin serán remitidos a la Jefatura de Policía, poniéndose los materiales a disposición del Gobierno de la Provincia.

Art. 366. Los efectos decomisados y los pertenecientes a terceros no responsables no reclamados en la oportunidad señalada en el artículo anterior, serán remitidos para su venta al Monte de Piedad Municipal, y el producido se depositará en el Banco de la Provincia a la orden del Patronato de Liberados; depositándose a la misma orden el dinero decomisado y el perteneciente a terceros una vez reunidas las condiciones precedentemente establecidas.

Art. 367. En las secretarías de los Juzgados de Instrucción y de las Cámaras se llevará un libro especial, en el que se anotarán la entrada y salida de los instrumentos y efectos del delito, comprendiendo también el dinero, con todas las indicaciones pertinentes de acuerdo con las disposiciones de los artículos anteriores.

CAPITULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 368. Este Código empezará a regir a los sesenta días de su promulgación y se aplicará también a las causas en trámite, salvo que en éstas hubiere recaído sentencia, aun cuando no estuviere firme o se hallare pendiente de recurso.

Encontrándose las causas en plenario, quedará sin efecto todo lo actuado con posterioridad a la resolución que declara ter-

minado el sumario y deberán remitirse a la Cámara que corresponda para que intervenga en única instancia y en juicio oral.

Las sentencias pronunciadas y las que se hallaren pendientes de ejecución, serán mandadas cumplir por la Cámara del Crimen Departamental.

Art. 369. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo prescripto por este Código.

Art. 370. Comuníquese al Poder Ejecutivo.



INDICE



C. Procedimiento Penal.



INDICE



ANTECEDENTES

I.—Decreto proponiendo las reformas y designando la comisión encargada de ellas	9
II.—Nota elevando los proyectos de reformas	11
III.—Exposición de motivos	15

PROYECTOS DE LEYES ANEXAS

I.—De creación de la justicia de instrucción en la Provincia	31
II.—De creación de una Cámara de Apelación en lo Criminal en cada Departamento Judicial	35
III.—De represión de los delitos contra el honor, propagados por medio de la prensa	38

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

Jurisdicción, competencia y cuestiones de competencia	41
---	----

TITULO II

Recusaciones y excusaciones	45
-----------------------------------	----

TITULO III

Notificaciones, citaciones y emplazamientos	48
---	----

TITULO IV

Términos judiciales	49
---------------------------	----

TITULO V

Costas	51
--------------	----



LIBRO II SUMARIO

TITULO I

Bases para su iniciación

CAPÍTULO I. — Denuncia	53
CAPÍTULO II. — Acciones	54
CAPÍTULO III. — Intervención del particular damnificado	54
CAPÍTULO IV. — Querrela	56
CAPÍTULO V. — Instrucción del sumario	57

TITULO II

CAPÍTULO I. — Diligencias preliminares	59
CAPÍTULO II. — Declaración del imputado	64
CAPÍTULO III. — Identidad del procesado	66
CAPÍTULO IV. — Circunstancias personales del procesado	67

TITULO III

Testigos

CAPÍTULO I. — Disposiciones generales	68
CAPÍTULO II. — Careos	72
CAPÍTULO III. — Examen pericial	73
CAPÍTULO IV. — Documentos	75

TITULO IV

Detención, prisión preventiva	75
-------------------------------------	----

TITULO V

Entrada y registro en domicilio, edificio público o lugar cerrado	78
---	----

TITULO VI

Detención y apertura de la correspondencia epistolar y telegráfica del procesado	80
--	----

TITULO VII

Disposiciones comunes	80
-----------------------------	----

TITULO VIII

Conclusión del sumario y su remisión a la Cámara para el juicio oral en única instancia	81
---	----

**LIBRO III
PROCEDIMIENTO ORAL**

TÍTULO I

Preliminares

TÍTULO II

Juicio oral

TÍTULO III

Disposiciones comunes

TÍTULO IV

Veredicto

**LIBRO IV
RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ANTE LOS
TRIBUNALES SUPERIORES**

TÍTULO I

Recursos

CAPÍTULO I. — Recurso de aclaración

CAPÍTULO II. — Recurso de reposición

CAPÍTULO III. — Recurso de apelación

CAPÍTULO IV. — Recurso de nulidad

CAPÍTULO V. — Recurso de queja

CAPÍTULO VI. — Recurso de revisión

TÍTULO II

Modo de proceder en segunda instancia

TÍTULO III

Recurso de casación para ante la Suprema Corte de Justicia

TÍTULO IV

Ejecución de la sentencia

TÍTULO V

Libertad condicional





LIBRO V

INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SECCIÓN I. — Incidentes

TÍTULO I

Sobreseimiento	96
----------------------	----

TÍTULO II

Excarcelación o eximición bajo fianza o caución	99
---	----

TÍTULO III

Locura, fuga, rebeldía y muerte del procesado	101
---	-----

SECCIÓN II. — Procedimientos especiales

TÍTULO I

Modo de proceder en el caso de detención, arresto o prisión ilegal de personas	102
--	-----

TÍTULO II

Juicio de calumnia e injurias	106
-------------------------------------	-----

TÍTULO III

Procedimientos en los juicios sobre faltas	107
--	-----

TÍTULO IV

Procedimientos relativos a menores	109
--	-----

TÍTULO FINAL

CAPÍTULO I. — Disposiciones complementarias	111
CAPÍTULO II. — Disposiciones transitorias	111

